

8. LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO, ENTRE MÉTODO Y ARGUMENTACIÓN. HACIA UNA TEORÍA NORMATIVA.

Juan Antonio García Amado
Universidad de León (España)
dpbaga@isidoro.unileon.es

A) Planteamiento.

1. La decisión jurídica y sus métodos.

1.1. El problema de la racionalidad.

Este trabajo pretende insertarse dentro de los intentos de construir una teoría de la decisión jurídica racional. Es éste el campo que en nuestros días suele transitar la llamada teoría de la argumentación jurídica. Pero dentro de ese marco nuestra propuesta tiene en común con aquella teoría la pretensión de superar los planteamientos puramente irracionalistas de la decisión judicial, esto es, de afirmar que existen parámetros y criterios mínimamente objetivos y operativos a los efectos de controlar dicha racionalidad y, por tanto, de fundamentar el juicio que se pueda realizar acerca de si una decisión judicial es racional o irracional. Mas, como luego insistiremos, no compartimos la ilusión que se puedan proporcionar tales parámetros para dirimir de la corrección material de las valoraciones que el juez lleva a cabo como base de su decisión. Si pensamos, en cambio, que existen criterios formales que funcionan como exigencias mínimas de tal racionalidad, criterios que tienen que ver fundamentalmente con el modo como el correspondiente razonamiento decisorio se estructura y con el grado de sustento que se proporcione para las premisas que en el mismo concurren. Este enfoque no es original, sino muy habitual en nuestros días, y podría resumirse en la idea que decisión racional (o, al menos, o irracional) es aquella que va avalada por una motivación suficiente y que respeta las reglas de la lógica en el modo en que los argumentos que componen dicha motivación se conectan con la decisión final o fallo. El asunto principal estriba en saber qué notas ha de reunir una motivación que pueda tildarse de suficiente.

La cuestión de cómo y con qué elementos y base puede y debe razonar el juez para hallar y fundamentar adecuadamente sus decisiones es el tema tradicional de la metodología jurídica de interpretación y aplicación del Derecho. La doctrina metodológica propone guías para el razonamiento judicial y sus diferentes pasos y etapas: la interpretación de las normas, la valoración y prueba de los hechos, el colmado de lagunas, la resolución de antinomias, etc. Y ya sea por efecto del valor intrínseco de tales métodos o guías, ya por

el adoctrinamiento metodológico, ya por imperativo de la correspondiente cultura jurídica en que tales métodos se insertan y cobran sentido y utilidad, esos métodos gozan, al menos en su núcleo básico, de general aceptación en la doctrina y de habitual uso en la práctica judicial.

Podemos, pues, dar por sentado que la actividad judicial decisoria es una actividad metódica, que se estima que debe ser y de hecho es guiada por ciertos métodos o modos estandarizados de proceder.

1.2. La relación entre métodos y racionalidad de la decisión: tres puntos de vista.

Cuestión distinta es el debate sobre cuál sea el valor real y la razón de ser de dichos métodos generalmente operativos.

De la literatura metodológica de los siglos XIX y XX podemos entresacar tres maneras principales de concebir la función de los métodos de interpretación y aplicación del Derecho: los métodos como instrucción técnica precisa, como herramienta retórica y como argumento justificatorio de una decisión *prima facie* correcta.

- La primera de esas concepciones, la del método como instrucción técnica suficientemente precisa y operativa para conducir a la decisión judicial correcta, la vemos representada en la metodología jurídica dominante en el siglo XIX, desde Savigny a la Jurisprudencia de Conceptos o la Escuela de la Exégesis, y estaría presente, con algunos matices que suavizan tal optimismo, en lo que podemos llamar la metodología más “ortodoxa” del siglo XX, representada por ejemplo por la Jurisprudencia de Intereses o la Jurisprudencia de Valoraciones; por no hablar de cómo de este modo se presentan y exponen los métodos en la dogmática civilista. Los métodos que se proponen ahí equivalen a instrucciones de uso de las normas jurídicas y los casos, instrucciones que garantizan, cuando son cabalmente seguidas, el acierto de la correspondiente decisión.

- La perspectiva opuesta, la de los métodos como puras herramientas retóricas, es la que se deja ver en doctrinas de corte realista, como pueda ser la de Ross. Los métodos en este caso son contemplados como herramientas de las que el juez se vale para encubrir los verdaderos móviles de su decisión, con un ropaje de aparente objetividad y tecnicismo, con lo que realmente no guían el razonamiento y su función es meramente persuasiva e ideológica.

- En una posición intermedia se sitúan las actuales teorías de

la argumentación, como la de Alexy. Se parte de que la decisión correcta es la dotada de suficiente justificación expresa, la que va avalada por suficientes y buenos argumentos. Y los diferentes métodos proporcionan argumentos que gozan de amplio consenso y de un fundamento suficiente, por estar a su vez apoyados en ciertos valores jurídicos a cuya realización coadyuvan, como para que el resultado de su uso, la consiguiente decisión, pueda considerarse como admisible o racional *prima facie*, es decir, mientras no haya buenas razones que justifiquen un resultado contrario.

En cada una de esas tres concepciones hay algo de aprovechable. La primera sirve para poner de relieve la importancia de los métodos como cauce de un razonamiento judicial que, sin ellos, se perdería irremisiblemente en la arbitrariedad y el radical subjetivismo, con el consiguiente coste para la seguridad de las expectativas sociales sobre el Derecho. La segunda ha hecho tomar conciencia del carácter contradictorio de los métodos habituales, dado que sirven para justificar decisiones radicalmente distintas, con lo que el problema central pasa a ser el de si puede existir o no un control de la utilización racional de tales métodos, lo que ante todo alude a la necesidad de contar con metarreglas o metamétodos que eviten que la opción por un método u otro sea absolutamente discrecional y al albur de los gustos del juez de turno.

Por su parte, la tercera concepción ha servido sobre todo para centrar la discusión, mostrando que su naturaleza de los métodos jurídicos tienen más de tópicos que de otra cosa, que la justificación de cada uno radica en el consenso del que goza y que ese consenso va unido a los valores del ordenamiento jurídico que con cada método en el fondo se defiende. Además, estas doctrinas sitúan la discusión en el contexto de justificación intersubjetiva de la decisión, con lo que el debate logra desprenderse en buena medida del oscuro asunto de las intenciones o móviles personales del juez. Cosa distinta es que muchos de los cultivadores de la llamada teoría de la argumentación jurídica entiendan que la corrección *prima facie* que esos métodos garantizan pueda ceder ante razones más fuertes, entendidas como razones materiales con fundamento perfectamente objetivo. Ese cognitivismo que dichos autores profesan es un asunto que, en mi opinión, no empaña, aunque no se comparta, el acierto de ubicar el tema de la manera que hemos señalado.

1.3. ¿Una teoría normativa de los métodos jurídicos?

Creemos que se puede sostener que la actividad judicial decisoria es una actividad metódica, guiada por ciertos métodos. Ese carácter metódico puede sostenerse, en primer lugar, como dato

empírico, pues es fácilmente constatable que en las sentencias de los tribunales se repite la invocación y uso de esos métodos generalmente admitidos en nuestra cultura jurídica. Pero nuestra afirmación del carácter metódico de la actividad judicial es también normativa, en el sentido que creemos posible una teoría de los métodos jurídicos que dé pautas suficientes para poder diferenciar entre una decisión metódicamente correcta y una incorrecta. Y la corrección metódica sería, para la perspectiva que aquí asumimos, el indicador más válido de la racionalidad de la decisión. Por supuesto, una tal teoría requiere la construcción de una teoría de cada método, de sus requisitos de correcta utilización y de la interrelación entre los métodos.

1.4. Presupuestos de la teoría normativa de los métodos jurídicos.

Como ya hemos señalado, nos interesa una teoría normativa de los métodos jurídicos. Delimitaremos este propósito mencionando algunas cosas que esta teoría no atiende y otras que presupone o que son su punto de partida.

- No se pretende una enumeración y descripción empírica de los métodos o argumentos usuales en la justificación de las decisiones. Esto significa que no se intenta:

i) Describir el modo en que los distintos métodos aparecen usados en una sentencia o conjunto de sentencias, ni la mayor o menor frecuencia de su uso, ni las jerarquías que en las sentencias los jueces suelen establecer entre ellos, etc.

ii) Exponer los factores sociales, políticos, económicos, etc. que llevan en cada momento y lugar a los jueces a usar unos métodos u otros.

iii) Exponer ni reglamentar el proceso mental, psicológico, que lleva a los jueces a decidir de un modo u otro o con base en unos u otros argumentos, ni los condicionamientos personales que pueden determinar tal proceso psicológico.

Estos tres asuntos tienen el mayor interés teórico, por supuesto. El primero, sería el objeto de una muy necesaria teoría descriptiva de la argumentación jurídica. El segundo, sería un tema de la sociología jurídica y de la historia de la jurisprudencia. El tercero, constituiría materia de la psicología jurídica, concretamente de la psicología judicial. De las investigaciones en los tres apartados se seguirían, sin duda, consecuencias importantes para cosas tales como la enseñanza del Derecho, los criterios de selección de los jueces, la

organización de la independencia judicial, la regulación de la responsabilidad penal y disciplinaria de los jueces, la relación entre Derecho, jueces y cambio social, la influencia de las ideologías y mentalidades en la eficacia del Derecho, etc.

- Positivamente, se presuponen una serie de cuestiones, sin las que este enfoque normativo no tendría sentido, y que conviene explicitar:

i) Es posible diferenciar buenas y malas justificaciones de la decisión jurídica y, sobre esa base, clasificar las decisiones (los fallos) como racionales o irracionales. Decisiones racionales serán, así, las que estén bien justificadas.

ii) A la hora de establecer el criterio de bondad de la justificación (y de racionalidad de la decisión) utilizamos el que llamaremos “parámetro de racionalidad argumentativa débil”. Lo podemos desglosar así, en los siguientes componentes:

a) El razonamiento decisorio ha de ser lógicamente correcto, en su articulación final, que va de los motivos al fallo, y en sus pasos intermedios, en los que se justifican decisiones relativas a cosas tales como la elección de la norma, aplicable, la interpretación de la norma, el acaecimiento y calificación de los hechos, etc.

Por tanto, partimos del carácter deductivo del razonamiento jurídico. El razonamiento decisorio que vulnere reglas de la lógica deductiva será incorrecto y la consiguiente decisión, irracional por deficientemente justificada. Con esto no tomamos partido por ningún tipo de formalismo lógico de la decisión jurídica¹. Esto nos sirve para rechazar tanto el irracionalismo

1. La etiqueta de formalistas se suele poner, con ánimo crítico, a aquellas teorías que sostienen que el razonamiento jurídico está regido por las reglas de la lógica deductiva y a las que defienden, como aquí hacemos, que la decisión judicial debe ser compatible con el tenor “literal” de la norma legal, cuestiones ambas que aquí aceptamos. Pero hay que hacer algunas puntualizaciones. En cuanto al carácter deductivo, hay que repetir una y mil veces que la lógica no es árbitro de la corrección material del razonamiento, que afirmar ese carácter deductivo no equivale a creer, de modo absolutamente ingenuo, que el juez encuentra dadas y acabadas las premisas con las que el fallo debe ser lógicamente compatible. La lógica no elimina los amplios márgenes de libertad decisoria del juez, sólo le veta que los razonamientos con que justifica el uso de esa libertad sean formalmente incorrectos. Que el razonamiento jurídico decisorio tenga un carácter deductivo no significa, en absoluto, que la decisión tenga que seguirse de la norma legal en sus términos estrictos. Significa que el fallo ha de ser conclusión lógica a partir de las premisa o premisas normativas que se establezcan y los hechos dados por probados. Pero esa premisa normativa puede perfectamente ser una norma de justicia o equidad que sustituya o enmiende a la norma legal. Pretender que la decisión sólo es “lógica” si se deduce, sin añadido ni trabajo ninguno, del puro enunciado de la norma legal es un planteamiento logicista ingenuo, y es la equiparación entre tal logicismo deductivista ingenuo y el formalismo ingenuo lo que ha llevado a cuestionar el carácter deductivo del razonamiento. Ninguna regla lógica impone que la premisa normativa del razonamiento tenga que ser una premisa legal. Tal exigencia sería una exigencia del formalismo o de alguna doctrina jurídica similar, no una exigencia de la lógica. En segundo lugar, defender que la decisión del

empirista² como el irracionalismo iusnaturalista³ (tipo realismo “clásico”, à la Villey, D’Ors, etc.).

b) La justificación de las decisiones judiciales ha de hacer uso de métodos o argumentos admisibles. Esta idea de admisibilidad de los métodos implica una toma de postura normativa que ha de ser justificada⁴. Partamos de un ejemplo. Sería posible concebir un método de interpretación teológico (que estableciera que se ha de dar a la norma el significado que esté más en consonancia con la voluntad de Dios) o un método de interpretación estético (que dispusiera que se debe otorgar a la norma el significado que permita a la norma configurarse como más aceptable desde un punto de vista estético). Prácticamente todos estaríamos de acuerdo en que estos dos métodos no son admisibles. ¿Con qué base fundaríamos tal rechazo?. Podríamos argumentarlo así:

- Dichos métodos no son habituales en nuestros días, están al margen de nuestra cultura jurídica, y hasta se oponen a valores fundamentales de la misma (como la diferenciación entre conciencia o gusto individual y patrones de comportamiento colectivo, y como pluralismo de creencias, etc.), aunque pudo no ser así en otro tiempo. Hay ahí, si se quiere, una cierta “fuerza normativa de lo fáctico”.

juez debe ser compatible con el tenor literal de la ley no significa volver al viejo sueño que la ley sea perfectamente clara y unívoca, capaz de determinar por sí misma y sin más el fallo para el caso que bajo ella se subsume. Significa sólo propugnar que el significado que el juez asigne a la norma que interpreta y aplica no sea inventado y desentonante del significado “normal” o técnico-jurídico de sus términos y enunciados, pero reconociendo que los significados posibles, no discordantes, pueden ser plurales, con lo que tampoco aquí se está insinuando que la interpretación no sea necesaria o que no quepan distintas interpretaciones igualmente válidas en lo que a su relación con la semántica de los términos se refiere. Como dice Luzzatti, “el “sentido literal” no es de ningún modo aquel sentido claro y absolutamente unívoco que sería necesario para transformar al juez en una máquina silogística cuyo funcionamiento estuviese exactamente predeterminado” (C. Luzzatti, *La vaghezza delle norme*, Milán, Giuffrè, 1990, p. 239).

2. Para éstos el peso de los móviles personales del decididor hace la justificación irrelevante en términos de racionalidad (sería relevante, todo lo más, en términos de eficacia retórica), y con ello hasta la validez lógica del razonamiento no es sino parte del encubrimiento de esos móviles, arbitrarios e incontrolables por definición.

3. Para éstos sólo cuenta la validez material de la decisión, resultado de una intuición de lo justo, un sano sentimiento jurídico, la sumisión a un modelo material de ser humano y sociedad dictado por Dios, el Derecho natural, etc., por lo que dicha corrección material anula toda importancia del rigor lógico: por ser lógicamente incorrecto el razonamiento decisorio no perdería su valor racional si da en el clavo de la verdadera justicia.

4. Como dicen McCormick y Wróblewski, “The practice of offering justifications is one which acknowledges that one’s actions and opinions are a subject of legitimate concern to some others, and that they may be open to challenge or objection. (...) Justification in the practical context plainly presupposes some normative setting. Without standards discriminating between right and wrong in action, there could be no difference between the justified and the unjustified, hence no premises to adduce or oppose in the giving or contesting of justification. The question of justification is therefore open always to the further question: justification by what standards?” (J. Wróblewski, N. McCormick, “On Justification and Interpretation”, *ARSP*, Bif 53, 1994, p. 256). Los que aquí estamos llamando métodos serían standards de justificación.

- Dichos métodos son incompatibles con los presupuestos valorativos básicos del moderno Estado de Derecho, constitucional y democrático y, por lo mismo, incompatibles con el modelo de sistema jurídico-político de tal Estado. No pretendemos sostener la tesis fuerte que en sí sean fuente de injusticia o que encierren valores en sí erróneos, sino que tienen que resultar inaceptables para quien asuma, con el fundamento que se quiera, las reglas del juego jurídico-político vigentes en tal Estado y que se traducen en una cierta concepción mínima de los poderes como controlables y del ordenamiento jurídico como coherente y consistente y al servicio de valores como la igualdad de los ciudadanos, la seguridad jurídica y una justicia de las normas y decisiones que resulte de procesos democráticos compatibles con la libertad individual y el pluralismo.

La admisibilidad de unos u otros métodos tiene que ver con su sustrato valorativo. De los diversos métodos que habitualmente se utilizan (o de los que se quiera proponer, aun no siendo habituales) cabe preguntarse el porqué se entienda que pueden conducir a decisiones correctas. La respuesta remitirá siempre a algún valor que se considera defendible, tanto en su carácter general como en su compatibilidad con los presupuestos que se asume que el ordenamiento jurídico debe cumplir.

Por consiguiente, una teoría de los métodos jurídicos que no se plantee en términos pura y absolutamente descriptivos de la jurisprudencia, no podrá nunca ser totalmente neutral. Una simple enumeración y explicación de los métodos generalmente admitidos, del tipo de la que se suele contener en los manuales y tratados de metodología jurídica, es ya una toma de partido, al menos tácita, en cuanto que consagra y da por buenos ciertos métodos (y su correspondiente sustrato valorativo) propios de una determinada situación o cultura jurídica.

Por eso, una teoría de los métodos que se pretenda completa y coherente ha de mostrarse consciente de tales implicaciones y explicitar en la mayor medida posible sus presupuestos valorativos. En concreto:

-Al seleccionar unos métodos u otros, el tratadista está tácita o explícitamente manifestando dos cosas: un determinado ideal social, en el que el Derecho y su práctica se insertan, y una determinada idea del Derecho.

- Cuando el tratadista expone jerarquías u órdenes de preferencia entre los métodos concurrentes, esas sus opciones valorativas se hacen aun más patentes. La exigencia de fundamentar en la mayor medida posible eso que son opciones, y no puras descripciones, se acrecienta, por tanto.

Por todas estas razones, cualquier doctrina de los métodos jurídicos es necesariamente normativa y parte de una determinada concepción del Derecho y la sociedad.

Se impone, pues, justificar nuestra aproximación al tema: partimos de un planteamiento positivista en lo jurídico y de defensa de los valores del constitucionalismo democrático, por otro. Creemos, además, que lo segundo exige lo primero, pero justificar esto sería tema de otro trabajo. En suma, como métodos admisibles consideraremos aquellos métodos habituales que son compatibles con la idea del Derecho y su aplicación propios del Estado de Derecho, puesto que recogen valores que éste consagra, exige o, al menos, permite.

c) El uso de esos métodos admisibles ha de ser correcto. A la necesidad de corrección lógica del consiguiente razonamiento ya hemos aludido. Aquí nos referimos a otros parámetros de corrección que también son, al menos en buena medida, formales. Concretamente:

- Cada método supone una determinada estructura del razonamiento que lo aplica. En tal estructura hay siempre una premisa normativa de ese razonamiento, y una serie de condiciones que se han de acreditar, en las consiguientes premisas, para mostrar que se dan los requisitos o circunstancias a los que la premisa normativa liga la consecuencia que se pretende imponer. Pues bien, el primer requisito del correcto uso de cada método es el que podemos llamar requisito de plenitud estructural: el razonamiento ha de recoger explícitamente todos esos pasos que el método exige. Al fin y al cabo, este requisito no es sino una manifestación de la exigencia de corrección lógica del razonamiento, con el añadido que se han de evitar razonamientos entimemáticos, salvo en cuestiones de absoluta evidencia.

- El segundo requisito lo podemos llamar de saturación de las premisas. En la estructura de todo razonamiento aplicativo de un método hay siempre afirmaciones que recogen juicios singulares. Tales afirmaciones pueden versar sobre hechos,

ya sean relativas a hechos lingüísticos, ya a objetos del mundo empírico o a relaciones entre objetos, ya a datos del sistema jurídico, o ya se trate de afirmaciones que califican valorativamente un hecho o acción. El uso correcto de un método significa, en lo que a este requisito se refiere, que se ha de fundamentar y acreditar tales afirmaciones en la mayor medida razonablemente posible. Por tanto, un mal uso de un método se da cuando cualquiera de las premisas, salvo la premisa mayor normativa⁵, se afirma dogmáticamente, sin aducir prueba o argumento razonable de apoyo.

Lo anterior puede llevarnos a entender que nos planteamos una cadena al infinito de justificación de las justificaciones. Obviamente, tal exigencia es absurdo que se plantee para la justificación de la decisión judicial y de las razones o subdecisiones en que se apoya. Pero trazar un límite preciso es imposible. Por eso hemos hablado de “la mayor medida razonablemente posible”. ¿Cuál sería una justificación razonablemente suficiente?. Aquella que aporte datos, indicios o razones bastantes como para poder pensar que quien argumenta realmente se esfuerza en que su argumentación pueda resultar admisible para cualquier interlocutor suficientemente formado e informado, de modo que este pueda discrepar en la verdad u oportunidad de tales datos, indicios o razones, pero no afirmar tajantemente y sin fundamento que el otro no ha fundado mínimamente su afirmación. Con esto estamos asumiendo una de las aportaciones más positivas de las teorías de la argumentación.

iii) ¿Estamos con todo esto y sin más dando por buena la distinción entre justificación interna y justificación externa⁶, tal como suele emplearse en las teorías de la argumentación jurídica?. La respuesta debe ser matizada. Con nuestra propuesta admitimos, efectivamente, que el razonamiento judicial ha de ser lógicamente correcto (justificación interna), y que la corrección lógica no basta como parámetro de corrección de la decisión, y que, por tanto, hay que aportar razones sustanciales fundamentadas. Aceptamos también que esas razones deberán justificarse de modo diverso según que sean empíricas, jurídico-positivas, lingüísticas, morales, políticas, etc. Pero ya hemos dicho que nuestro enfoque sigue siendo en buena medida formal. Lo que no afirmamos es que exista procedimiento ninguno para ponderar objetivamente entre esas razones suficientemente fundamentadas. Esa

5. La justificación de ésta se opera a otro nivel, en el plano de la admisibilidad general de cada método, a que antes nos referimos.

6. Sobre la imprecisión y los problemas de esa distinción vid. recientemente, C. Redondo, “La justificación de decisiones judiciales”, *Isegoría*, 21, 1999, pp. 149-150.

es la parte de las teorías normativas de la argumentación jurídica con la que nuestro planteamiento no se compromete. No pensamos que quepa utilizar como parámetro mínimamente eficiente al respecto ni la hipótesis de un consenso idealmente racional, al modo de Alexy, ni un consenso fáctico correctamente alcanzado en el seno de una determinada cultura jurídica, al estilo de Aarnio, ni un “sentido de la adecuación” a la manera de Günther y Habermas, etc. Podríamos, pues, sintetizar diciendo que la justificación externa es necesaria, que la justificación externa ha de ser una justificación suficientemente desarrollada, pero que en todo lo que dicha justificación contenga valoraciones coherentemente defendidas no es posible dirimir su mayor o menor racionalidad. La discutibilidad es ineliminable de la justificación externa.

Más precisamente. Los juicios de valor concurren en la práctica judicial decisoria en múltiples momentos, suficientemente conocidos. Mencionemos ahora solamente los que tienen que ver con los momentos que hasta aquí hemos mencionado y que interesan para nuestro tema:

- Al elegir unos métodos u otros. Ya hemos dicho que tal elección está en función de la concepción de la sociedad y el Derecho que se profese. La exigencia “formal” que aquí rige es que el juez sea coherente con los presupuestos que asume al ser juez y serlo de un determinado sistema jurídico regido por ciertos valores jurídico-morales y jurídico-políticos.

- Al dar prioridad en cada caso a un método u otro de esos que son congruentes con tales presupuestos. Aquí el elemento de preferencia personal, dentro de esos límites y sentadas las exigencias antes aludidas es ineliminable. La exigencia “formal” de coherencia aquí se traduce únicamente en que tal preferencia caso por caso se pueda articular como aplicación de un orden de preferencia sentado con carácter general, sea el que sea.

- Al aplicar cada método el juez también realiza opciones valorativas. Por ejemplo, estimar que los datos que posee y muestra acreditan suficientemente que la voluntad del legislador era una u otra, o que el parecido entre el hecho normado y aquel no normado que se resuelve analógicamente es suficientemente relevante, etc. Podemos, como aquí se propugna, pedir que se maximice el rigor en la apreciación de la cantidad y calidad de los respectivos datos, pero también es aquí ineludible el elemento personal.

En suma, propugnamos como patrón de corrección o racionalidad de la decisión una justificación externa suficiente, sin

pretender que pueda existir nada parecido a un criterio de perfecta racionalidad material u objetiva de las valoraciones. Pero no por esto nos parece nuestro planteamiento modesto, pues se propugnan suficientes elementos de control de racionalidad.

iv) Por último, entendemos que lo que da sentido a una teoría normativa de los métodos o argumentos jurídicos, como la que aquí se propone, es el que pueda servir como herramienta de análisis crítico de las sentencias judiciales. Si queremos que tal análisis sea algo más que la habitual expresión de discrepancias o coincidencias ideológicas, debemos contar con conceptos metodológicos suficientemente desarrollados y precisos, a los fines que pueda estar claro en qué diferenciamos el juicio de corrección o incorrección de una sentencia del juicio de acuerdo o desacuerdo con su contenido material.

2. Herramientas conceptuales.

Así delimitado nuestro objeto y nuestro enfoque del mismo, pretendemos haber dejado claro que queremos poner las bases de una teoría de los métodos jurídicos, fuertemente inspirada en muchos de los planteamientos de las teorías de la argumentación jurídica pero que no participa de la noción fuerte de racionalidad práctica que algunas de las más representativas de esas teorías aplican.

Lo que a continuación se impone es sentar un adecuado instrumental conceptual. Nos ocuparemos solamente de los métodos o argumentos dirigidos al tratamiento de la premisa normativa del razonamiento jurídico decisorio. Es decir, no trataremos de los problemas, métodos o argumentos que se usan para configurar y fundamentar la premisa fáctica. Y en este trabajo aludiremos sólo a los métodos interpretativos.

Trataremos, pues, de los métodos o argumentos de que los jueces se valen para dotar de contenido a la premisa normativa con la que van a calificar los hechos que enjuician y a asignarles unas u otras consecuencias jurídicas. Comencemos por aclarar en qué sentido hablamos de métodos o argumentos, para después clasificarlos, empezando por la distinción más elemental entre argumentos interpretativos y creativos.

Con el término “método” se suelen designar cosas distintas en la literatura sobre estas materias. Por un lado, se suele denominar con este término a ciertas pautas, etiquetas o tópicos. Así se dice por ejemplo que los métodos interpretativos que propuso Savigny son el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. De esta forma, con

“métodos” se alude a ciertas sedes o “lugares” donde el intérprete va a hallar referencias o argumentos útiles o convenientes para su labor (la voluntad del legislador, la historia del precepto, etc.). En otras ocasiones al hablar de “métodos” se está haciendo referencia a determinadas fórmulas normativas, cuya función es encauzar la elección por el intérprete de la que será la premisa mayor de su razonamiento interpretativo. Por ejemplo, cuando se dice que la norma deberá interpretarse dándole aquel significado que se corresponda con y permita alcanzar el fin que el legislador pretendió con ella y que en tal consiste el método teleológico-subjetivo. Pero a esta segunda noción se le puede dar un alcance más amplio, entendiendo que “método” (interpretativo en este caso) significa una guía o pauta de corrección del razonamiento interpretativo que acaba en una decisión interpretativa justificada. Desde este punto de vista, el método teleológico-subjetivo no se limitaría a decir que hay que atender al fin que el legislador quiso para la norma, sino que daría también pautas para el razonamiento que aplica ese mandato metodológico, estableciendo cosas tales como dónde y cómo puede acreditarse esa voluntad. La función de guía o indicador del razonamiento que el método posee se maximiza con esta última noción. Es decir, con ella se atiende también al desarrollo argumentativo de aplicación de aquella regla metódica. Aquí adoptaremos esa perspectiva.

Para la teoría de la argumentación jurídica estos métodos son argumentos que necesitan, a su vez, ser argumentados, es decir, aplicados justificando argumentativamente los distintos pasos de tal aplicación. Por tanto, hablar de método en este sentido es hacer referencia a un procedimiento complejo, a un razonamiento con distintos pasos o etapas.

Así concebido, todo método posee:

- Una fórmula normativa que funciona como premisa normativa del razonamiento argumentativo, el cual es un razonamiento de aplicación de esa regla la fórmula normativa que se expresa. Por ejemplo, la fórmula normativa del método teleológico-subjetivo podría rezar así: las normas deben interpretarse atribuyéndoles el significado que permita alcanzar el fin que para ellas quiso el legislador.

- Una estructura mínima de razonamiento aplicativo, en la cual, junto a la premisa mayor, formada por la fórmula normativa, hay siempre al menos un enunciado descriptivo (premis menor) y termina en una conclusión, que es un juicio individual. Veámoslo de nuevo con la forma más simplificada del razonamiento aplicativo del método teleológico-subjetivo:

P1: Las normas deben interpretarse atribuyéndoles el significado que permita alcanzar el fin que para ellas quiso el legislador.

P2: Para la norma N su autor quiso el significado S.

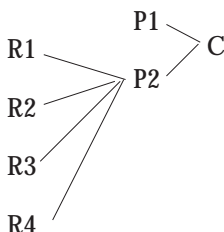
C: La norma N significa (debe entenderse como significando)

S.

- Las premisas de ese razonamiento deben estar y ser suficientemente justificadas si la aplicación del método se pretende que lleve a un resultado correcto:

P1, la fórmula normativa, no necesita justificación expresa, pues la tiene presupuesta en razón de su habitualidad y su carácter generalmente admitido, ligado a su sustrato valorativo. Se trata de tópicos. Esto no quiere decir que tales fórmulas no puedan discutirse, sino que su discusión, cuando se utilizan métodos generalmente aceptados y consolidados, tiene lugar en una etapa distinta y anterior, en términos jurídico-políticos.

La clave de la correcta aplicación del método está en la justificación de P2 (y en su caso P3...Pn). Por tanto, el razonamiento aplicativo correcto de un método ha de contener también una justificación suficiente de P2...Pn⁷.



Según el método de que se trate, el razonamiento aplicativo será más o menos complejo, por ser más o menos compleja la justificación de P2...Pn que se requiere.

P2 puede consistir en:

- Una afirmación de hechos, que pueden ser, a su vez:

7. Véase, por ejemplo, A. Peczenik, *Grundlagen der juristischen Argumentation*, Wien/New York, Springer, 1983, pp. 104ss.

- Hechos lingüísticos: justificación empírica, incluyendo en ella cosas tales como el invocar una definición contenida en un diccionario.
- Hechos históricos: justificación histórica: basada en la aportación e interpretación de datos históricos.
- Hechos prospectivos (futuros): justificación probabilística (Ej.: el argumento consecuencialista presente en el método teleológico-objetivo).
- Hechos normativos: justificación normativa: hay en el ordenamiento una norma válida que dice "x".
- Etc.

- Una proposición valorativa (Ej.: que tal cosa se corresponde con la equidad, con la justicia, que tal consecuencia o estado de cosas es preferible a tal otro...). La justificación mínima requerida consistirá aquí en explicitar el orden o sistema de valores del que tal proposición se sigue o es concreción, mostrando, además, que tal sistema de valores es coherente con los presupuestos del sistema jurídico-político (Dworkin). Ej.: es preferible por más justa la interpretación no racista de n el racismo es malo teoría moral que sustente la igualdad de razas derecho fundamental del sistema...

Sentado lo anterior, debemos ahora poner a prueba nuestro enfoque mediante el análisis de los métodos. Nos queda añadir alguna puntualización.

Aquí analizaremos sólo los métodos interpretativos, no los creativos. Para justificar la selección que con esa base hacemos de los métodos que consideramos interpretativos, es necesario explicitar brevemente cuál es la pauta de distinción que usamos entre tales métodos y los creativos. Partimos de que interpretar es establecer cuál es el significado de un término o enunciado normativo, lo cual supone dos operaciones. Por un lado, averiguar lo que ese término significa con arreglo ya sea al uso lingüístico actual o ya sea en consonancia con la intención de su emisor, el legislador en este caso. Esa averiguación puede poner de relieve que dicho significado es plural (ambigüedad) o falta de certeza en cuanto a su exacta referencia (vaguedad). En ese caso tiene que acontecer la segunda operación de la interpretación, consistente en optar por uno de esos significados o precisar la referencia (normalmente a la luz del caso, estableciendo si dicho caso cae o no bajo los términos de la misma). Métodos interpretativos son los que sirven a ese objetivo que es la interpretación. Métodos creativos son los que se utilizan para justificar la creación de una norma nueva, con un determinado contenido. Norma nueva es aquella cuyo contenido no se corresponde con ninguna de las interpretaciones posibles de una norma preexistente. Y llamamos

interpretaciones posibles a aquellas atribuciones de significado a una norma que no van más allá del límite trazado por cualquiera de esas dos reglas de la semántica jurídica, es decir, la que dice que un término legal no puede significar nada distinto de lo marcado por el uso habitual del mismo o por la intención del legislador. Como veremos, esta última disyuntiva se resuelve según sea la doctrina interpretativa de la que se parta.

En segundo lugar, una teoría normativa de los métodos (interpretativos en este caso), como esta que pretendemos y en los términos que antes se expusieron, tiene que procurar una caracterización rigurosa de cada uno de ellos y, a partir de ahí, una adecuada clasificación en razón del modo en que operan, la función que cumplen y la manera en que se interrelacionan. Sólo así se podrá establecer con un mínimo rigor las exigencias de uso racional (esto es, suficientemente justificado de cada uno). Y sólo así evitaremos uno de los mayores defectos de las exposiciones al uso, que no pasan de asemejarse a puras enumeraciones de tópicos, sin mayor exigencia, tópicos perfectamente intercambiables y que aparentemente juegan del mismo modo y cumplen la misma función.

Por tales razones, nos parece importante distinguir entre criterios y reglas de la interpretación. Llamamos reglas de interpretación a aquellas reglas o pautas de la interpretación que o bien determinan cómo elegir entre interpretaciones posibles respaldadas por argumentos interpretativos, o bien prohíben las interpretaciones que lleven a ciertos resultados. En cambio, los criterios interpretativos son aquellos que establecen a qué ha de atenderse o qué debe tomar en consideración el intérprete para asignar positivamente significado a los enunciados normativos. Esta diferenciación se puede también ilustrar así: no es lo mismo decirle al intérprete que ha de tomar como referencia para la asignación del significado la voluntad del legislador o el fin de la norma, que decirle que no debe aplicar un significado que haga aparecer una antinomia. En este último caso no se le indica cómo puede positivamente hallar o establecer un significado, sino que se le veta un significado, sea cual sea el criterio mediante el que haya llegado a él.

En segundo lugar, diferenciaremos métodos positivos y métodos negativos. Los primeros sostienen decisiones interpretativas admisibles. Los segundos excluyen, por inadmisibles en ciertos casos, decisiones interpretativas que normalmente son admisibles.

Utilizaremos también la noción de doctrina metodológica. Llamamos doctrinas a las concepciones generales acerca de los fines, funciones y pautas de la aplicación del Derecho. Dichas doctrinas se basan en consideraciones jurídico-morales y jurídico-políticas y en una

determinada concepción del Derecho y su papel. Simplificando, y sólo a título ejemplificador, podemos decir que hay una doctrina metodológica positivista y una doctrina metodológica iusmoralista o antipositivista, cada una de las cuales puede tener distintas variantes. En cada doctrina metodológica se contendrán apreciaciones específicas sobre la decisión judicial correcta, los métodos admisibles como justificación de la misma y, especialmente, la interrelación y jerarquía entre esos métodos. Una diferencia crucial entre las doctrinas positivistas y antipositivistas versa siempre sobre la medida en que el tenor de la norma legal limita la decisión justificada del juez.

La doctrina que asumimos es una doctrina metodológica positivista, que también podríamos llamar doctrina formalista no ingenua.

Por último, aclaramos que al exponer los métodos recurriremos a la formalización lógica del razonamiento aplicativo de los mismos, pues tal formalización es especialmente útil para poner de relieve qué premisas deben concurrir para la corrección de tal razonamiento y, sobre todos, cuáles precisan de una especial carga argumentativa de justificación.

A continuación haremos referencia a los distintos métodos interpretativos.

3. Los métodos y las exigencias mínimas de racionalidad o corrección del razonamiento que los aplica.

3. 1. Método de interpretación literal.

El llamado método de interpretación literal o gramatical se puede definir como aquel que lleva a asignar a los términos legales el significado que les es propio en cuanto términos o expresiones lingüísticas. Pero al hablar así hemos utilizado ya una idea problemática, la que los términos o expresiones tienen un significado propio. Hay autores muy destacados, como Guastini, que discuten que quepa hablar de un significado propio de las palabras. Hay que comenzar por aclarar este asunto. Si al hablar de “significado propio” se pretende tomar partido por una doctrina de las tradicionalmente llamadas realistas, es decir, de aquellas que afirman que existen los universales, que el significado de cada término se corresponde con un contenido necesario, idealmente prefigurado y que antecede a toda práctica lingüística, a toda actividad de los hablantes, estamos, efectivamente ante una tesis muy cuestionable. Pero también resultará sumamente problemático sostener que las palabras no significan nada antes o al margen del sentido que quiera darles o efectivamente les dé el receptor de las

mismas. Si esto fuera así, no cabría que nos entendiéramos cuando hablamos y el lenguaje no podría cumplir su función primaria de vehículo de coordinación de nuestras acciones intersubjetivas. Por eso nos parece más exacto concebir que en cada época o momento histórico y en el contexto de una determinada lengua hablada en un determinado ámbito geográfico, las palabras poseen un significado, que viene dado por el uso social o grupal.

El lenguaje del Derecho se compone básicamente de palabras del lenguaje social ordinario, y en esa medida su significado es dependiente del uso social. Pero también se contienen en las normas jurídicas términos técnicos. Ese carácter técnico de ciertos términos que aparecen en el lenguaje legal puede consistir o bien en que algunas palabras del lenguaje social usual cobren un significado propio y específico entre los juristas; o bien en que ciertos términos sean propios y exclusivos de ese lenguaje jurídico. En cualquiera de los dos casos, la pauta de su significado la da el uso, si bien se tratará entonces del uso grupal, del que se hace entre los juristas, que prevalece y se impone frente al uso social general cuando se trata de términos del primer tipo que hemos mencionado. Es más, estos términos técnicos acreditan aun en mayor medida que es el uso el criterio dirimente del significado, pues la compulsión que cualquier jurista usuario de esos términos tiene de utilizarlos en ese su sentido específicamente jurídico, tal como son entendidos entre quienes cultivan el Derecho, es aun mayor.

Por tanto, en una primera aproximación, que luego tendremos que matizar, la pauta interpretativa que este método establece se podría plantear así: asígnese a los términos legales el significado que se derive de su uso. Podríamos formalizar así esta fórmula, siendo T un texto legal y W el uso lingüístico:

$$(x) \text{ Tx OWx}$$

El razonamiento aplicativo de este método, tendría la siguiente estructura formal:

$$\begin{array}{ll} (1) & (x) \text{ Tx OWx} \\ (2) & \text{Th} \\ (3) & \text{Wh Sh} \\ \hline (4) & \text{OSh} \end{array}$$

Su lectura sería:

(1) Para todo término lingüístico x, si x es un término de un texto

legal T, entonces se debe dar a x su significado con arreglo al uso lingüístico establecido (W).

(2) h es un término de un texto legal T.

(3) El significado con arreglo al uso lingüístico establecido (W) del término h es Sh.

(4) Obligatorio Sh.

Es de sobra sabido que afirmar que los términos de nuestro lenguaje, ordinario y jurídico, reciben su significado del uso, no implica en modo alguno sostener que ese significado sea unívoco y preciso. Puede ocurrir que el término sea ambiguo. O, casi siempre, que sea vago. Normalmente el problema de la ambigüedad se resuelve con la pura lectura contextualizada del término. Por el momento concentrémonos en la cuestión de la vaguedad, tema suficientemente conocido que aquí no vamos a explicar, sino sólo a mostrar en sus implicaciones para este método.

Puede ocurrir que el término que es objeto de la interpretación sea, con arreglo al uso, excepcionalmente, perfectamente unívoco y preciso, único, que carezca de toda ambigüedad o vaguedad. En ese caso, que sería en realidad el que está reproduciendo la formalización anterior, lo que este método está prescribiendo es que el aplicador de la norma le asigne ese significado y ningún otro. Conforme a lo que ya hemos explicado al trazar la delimitación entre interpretación y creación de normas, si el aplicador le otorga cualquier otro significado estaría creando una norma nueva, que sustituye al enunciado normativo supuestamente interpretado. Pero ya hemos dicho que tal ausencia completa de vaguedad es un supuesto excepcional, aunque no inexistente (pensemos por ejemplo en que la norma contenga un nombre propio).

¿Pero qué ocurre cuando el término legal interpretado adolece de vaguedad?. Sabemos que tal fenómeno implica que la referencia del término se torna imprecisa. Se suele comúnmente describir esta situación, tal como lo hicieron magistralmente Hart o Carrió, diciendo que en tal caso hay objetos que claramente caen bajo la referencia del término, y que encajan por tanto en lo que se llama su núcleo de significado, objetos que caen fuera de toda posible referencia del término, que estarían en la zona exterior, y objetos de los que es dudoso si caen o no bajo la referencia de la norma, que son los que se sitúan en la zona de penumbra. En tales casos y conforme al criterio que hemos establecido, diremos que toda asignación de significado que suponga no aplicar el término a un objeto que caiga en su núcleo de significado, o aplicarlo a un objeto que caiga en la zona exterior, no será interpretación, sino creación de una norma nueva que suplanta a la anterior para ese caso que se decide. En cambio, respecto de los objetos que estén en la zona de penumbra, se podrá verdaderamente

interpretar, ya extendiendo a ellos la referencia del término, ya sustrayéndolos de tal referencia. En tal caso se hace, respectivamente, lo que se conoce como interpretación extensiva o restrictiva. Por tanto, en esos casos se decide asignar un significado u otro al término, de modo que abarque más o menos objetos. ¿Qué tiene que decir al respecto el método de interpretación literal?. Se limitaría a establecer que se puede asignar cualquiera de esos significados, pero sólo esos.

Esta situación la podríamos representar formalmente así:

- (1) (x) Tx OWx
 - (2) Th
 - (3) Wh S¹h, S²h, S³h...Sⁿh
-
- (4) O (S¹h v S²h v S³h v...Sⁿh)

Si entendemos que este método impone que el significado que se otorgue a un término sea un significado acorde con el uso, y sólo un significado acorde con el uso, está prescribiendo que se elija uno de tales significados (S¹h, S²h, S³h...Sⁿh) y excluyendo que se opte por cualquier otro significado Sⁿ⁺¹h.

Lo que este método no resuelve es cuál ha de ser la elección entre esos significados posibles con arreglo al uso. Por eso se suele decir que el método de interpretación literal fundamenta la decisión interpretativa cuando el término que se interpreta carece de vaguedad (y ambigüedad), pero en los restantes casos sirve sólo para circunscribir el marco de las interpretaciones posibles, para delimitar lo que propiamente será interpretación de ese término, pero no para atribuirle un determinado significado. En tal ocasión la decisión interpretativa tendrá que basarse en alguno de los otros métodos interpretativos, métodos que habrán sido habilitados por el de interpretación literal⁸.

Este método funciona como método autónomo, es decir, que se basta para sostener una decisión interpretativa que se pretende correcta y suficientemente fundamentada, cuando lleva a constatar el carácter no vago ni ambiguo de un término. En las demás ocasiones funcionará unido a otros métodos para justificar la decisión interpretativa. Entonces el método literal y aquél o aquéllos que se usen a dicho efecto serán complementarios, funcionando el literal como habilitador y el/los otro(s) como dirimente(s).

8. Todo esto es sobradamente conocido. Dice por ejemplo Larenz: "el sentido literal inferible del uso general del lenguaje o, siempre que exista, del uso especial del lenguaje de la ley o del uso del lenguaje jurídico general, sirve a la interpretación, en primer lugar, como primera orientación; en segundo lugar seriala, en cuanto posible sentido literal -bien sea según el uso del lenguaje de entonces, bien según el actual- el límite de la interpretación propiamente dicha. En cierto modo amojona el campo en el que se lleva a cabo la ulterior actividad del intérprete" (K Larenz, Metodología de la Ciencia del Derecho, Barcelona, Ariel, 1994, p. 320).

Pero hasta aquí estamos tratando un supuesto un tanto forzado e inexacto, como es el que la actividad interpretativa se concentre en el análisis aislado de un término. En un término puede radicar la dificultad interpretativa de un enunciado legal, pero la interpretación será siempre de ese enunciado, que es al que en conjunto se ha de dar sentido, en tanto que se trata de establecer el contenido de una norma, y, además, la dificultad interpretativa que un término plantee será siempre por relación a y en cuanto parte de ese enunciado que lo contiene. Por tal razón, una definición más exacta de este método diría que es aquel que lleva a asignar a los términos legales el significado que les es propio en cuantos términos o expresiones lingüísticas y con arreglo al significado de los demás términos y expresiones del enunciado del que forman parte. De este modo, la llamada interpretación sintáctica sería parte también de la aplicación de este método, lo que no cabría si el método fuera aplicable a la interpretación aislada de términos. No vamos a extendernos aquí más sobre ese particular, bien conocido también.

Hemos dicho que entre los métodos diferenciamos, en razón de su función y modo de operar, reglas y criterios⁹. La cuestión ahora es si este método de interpretación literal es una regla o un criterio. Que se lo considere uno u otro dependerá de la doctrina de la interpretación que se maneje, con su consiguiente fundamento jurídico-político. Quienes no ven razón de peso para el respeto al significado "literal", en el sentido en que aquí venimos hablando, es decir, como respeto al límite de los significados posibles con arreglo al uso, y por tanto aceptan que se llame interpretación a la asignación de cualquier otro significado, respaldado por cualquier otro método, ponen el método literal al mismo nivel que los otros, sin limitarlos en modo alguno ni prevalecer sobre ellos. Bajo este punto de vista, estaríamos ante un criterio¹⁰, lo que significa que no se prescribe al intérprete asignar el significado acorde con el uso, sino que se le permite, se le ofrece esa posibilidad entre las diversas admisibles (asignar un significado con arreglo al uso, asignarlo con arreglo al fin -sin límite en el uso-, etc.).

En cambio, con la doctrina de la interpretación que estamos defendiendo y que subyace a nuestros planteamientos, con el método de interpretación literal estaríamos ante una regla, regla que prescribe que se dé a los enunciados legales sólo aquel o aquellos significados que sean compatibles con el uso lingüístico establecido, lo cual, a su

9. Recordemos. Los criterios permiten asignar un significado; es decir, convierten ese significado en admisible, pero no lo imponen como el único admisible. Las reglas imponen (reglas positivas) o proscriben (reglas negativas) un determinado resultado interpretativo, una determinada asignación de significado basada en alguno de los criterios.

10. La formalización cambiarse, utilizando P por "permitido": (x) Tx PWx. Pero en este momento vamos a dejar de lado esta posibilidad, quizá más conveniente y exacta.

vez, quiere decir que se excluye que cualquier otro método pueda servir como justificación de la atribución de un significado diferente. Así, este método sería una regla de interpretación que regula la actividad interpretativa estableciendo cuando los otros métodos pueden utilizarse para justificar una decisión interpretativa y cuales son las decisiones interpretativas justificadas con esos otros métodos que resultan admisibles (las compatibles con el significado “literal”). El método de interpretación literal funciona como regla positiva cuando sienta que el significado del término interpretado no es ambiguo ni vago y como regla negativa en los demás casos, vetando toda asignación de significado que no sea compatible con el tenor “literal”.

La afirmación del carácter de regla que poseería el método literal, choca con una constatación fácil de realizar: a menudo se considera y todos, hasta quienes defendemos este modo de operar de este método, admitimos, que puede estar plenamente justificado que en ciertos casos se haga una excepción a la aplicación “literal” de la ley; es decir, que la consecuencia prevista en la norma legal no se aplique a un objeto que cae sin duda bajo la referencia (con arreglo al uso) de los términos del supuesto de hecho de la norma. Por ejemplo, cuando tal aplicación dé lugar a resultados que generalmente serían considerados absurdos. Así, para justificar tal excepción, funciona el método o argumento de reducción al absurdo. ¿Cómo integrar este dato?

La respuesta sería que estamos ante el juego de dos reglas. La regla de interpretación literal prevalecería sobre cualquier criterio, pero puede estar limitada por otra regla.

Dejemos para más adelante la cuestión de cuántas y cuáles son las reglas que pueden interactuar con la de interpretación literal. Centrémonos por el momento únicamente en la que hemos mencionado, la regla del argumento ad absurdum (argumento apagógico), que, en cuanto regla interpretativa, se podría definir así: se debe evitar toda asignación a una norma de un significado que lleve a consecuencias absurdas en la práctica¹¹:

(x) $(Sx \rightarrow K) \rightarrow \neg Sx$

Donde K está por producción de consecuencia absurda.

11. Bajo esta fórmula y ese género de reducción al absurdo encajarían argumentos como el de reducción teológica, naturaleza de las cosas, evidencia, etc.

También podríamos representarlo así¹²:

$$(x) \text{ PSx } \rightarrow (\text{Sx } \rightarrow \text{K})$$

¿Cómo se relacionan las dos reglas, la de interpretación literal y la de prohibición de resultados absurdos?. La segunda se incorpora a la primera excepcionándola¹³:

$$(x) (\text{Tx } \rightarrow \text{OWx}) \rightarrow (\text{Wx } \rightarrow \neg \text{K})$$

También se puede representar así: $(x) (\text{Tx } \rightarrow (\text{Wx } \rightarrow \text{K}))$
 $\text{OWx })$

Así pues, vemos que una enunciación completa del método de interpretación literal como pauta de interpretación diría: se ha de asignar a los términos legales el significado que derive del uso lingüístico, salvo que dicho significado conduzca a consecuencias absurdas¹⁴.

La situación puede ser diferente según que, tal como antes hemos diferenciado, estemos ante términos vagos, que conforme al método literal puedan recibir varios significados, o frente a términos unívocos. En este último caso, la regla de interdicción del absurdo predominaría y estaríamos ante una excepción justificada al respeto al “tenor literal”¹⁵. Vemos ahí la regla de evitación del absurdo operando

12. Vemos que esta regla funciona con carácter general, frente al resultado de cualquier método interpretativo (o creativo).

13. Precisamente una ventaja de tener clara la diferencia entre reglas y criterios consiste en poder tasar las excepciones, es decir, en delimitar qué métodos o argumentos tienen que dominar sobre otros y cuáles pueden excepcionar a otros, con lo que se evita situar a todos los métodos al mismo nivel y como perfectamente intercambiables, con lo que todo resultado interpretativo sería igualmente válido con tal que se encontrara un método que lo sustentara. La pauta es: las reglas pueden limitar o excepcionar a los criterios, no a la inversa. Y las reglas pueden limitarse o excepcionarse entre sí.

14. Una importante cuestión teórica es la de cómo puede integrar esta regla una doctrina metodológica positivista, que en general objeta a que cualquier consideración valorativa pueda servir como justificación para enmendar el mandato legislativo. La respuesta sería que también el positivismo tiene que postular para el Derecho, en este caso el derecho legislado, unas mínimas condiciones de racionalidad. O, dicho de otra forma, que tiene que operar con ciertos presupuestos de racionalidad del legislador, ligados a la idea de legitimación de éste que sirve de base precisamente al postulado que se ha de respetar prioritariamente su voluntad. Así, del mismo modo que habrá que presuponer su voluntad de coherencia, habrá que presuponer también su racionalidad mínima, consistente en que no puede ser su propósito emitir mandatos absolutamente absurdos y contraintuitivos. En realidad, la diferencia entre las doctrinas metodológicas positivistas y antipositivistas no estriba en que las primeras hagan abstracción de toda consideración valorativa, sino que es una diferencia de grado: el tipo y la cantidad de valores que según unas y otras pueden legítimamente determinar la aplicación judicial del Derecho.

15. Un ejemplo. Una norma legal dice: “El esposo X deberá depositar mensualmente 100 dólares, destinados a pagar pensión de alimentos a Y”. Y resulta que “Y” no es el nombre de la esposa de X, sino de otra persona, y la esposa de X se llama Z. Y que la razón de ser de esa obligación que la norma establece es el pago de alimentos a la esposa, y sólo a la esposa. En ese caso podría pensarse que es el fin de la norma lo que dirime frente a la pura lectura “literal”. Pero ese fin sirve como dato justificatorio de la conclusión que es absurdo entender que X debe pagar a Y y no a Z.

como habilitadora del juego de los métodos creativos.

Cuando por ser vago el término interpretado las interpretaciones admisibles son varias, la regla de evitación del absurdo opera eliminando una de las interpretaciones posibles con arreglo al uso:

$$\begin{array}{ll}
 (1) & (x) (Tx \rightarrow (Wx \vee K) \vee OWx) \\
 (2) & Th \\
 (3) & Wh, S^1h, S^2h, S^3h \\
 (4) & S^3h \vee K \\
 \hline
 (4) & O(S^1h \vee S^2h)
 \end{array}$$

En este supuesto las interpretaciones admisibles serían sólo las dos señaladas en (4). En cambio, si las interpretaciones posibles con arreglo al método literal son sólo dos, la eliminación de una por causa de sus consecuencias absurdas implica que se debe imponer necesariamente la otra, y no queda lugar para el juego de otros criterios interpretativos.

$$\begin{array}{ll}
 (1) & (x) (Tx \rightarrow (Wx \vee K) \vee OWx) \\
 (2) & Th \\
 (3) & Wh, S^1h, S^2h \\
 (4) & S^2h \vee K \\
 \hline
 (4) & OS^1h
 \end{array}$$

Otra regla que prevalece sobre la regla de interpretación literal es la que entra en juego cuando del término interpretado existe una definición legal, pues en tal caso no es el uso el que determina el significado, sino esa definición: $(x) (Tx \rightarrow Lx) \rightarrow OLx$. Es un ejemplo de jerarquía entre las reglas. Ya hemos visto dos reglas que prevalecen sobre la regla literal.

Hemos caracterizado la interpretación literal como aquella que asigna significado a partir del uso actualmente establecido de los términos legales. Pero con ese elemento de actualidad estamos optando por una determinada doctrina interpretativa, aquella que tiene su contraria en la que afirma que el significado que debe asignarse es o bien el que estaba vigente (en uso) en el momento en que el legislador creó la norma, o bien el que el legislador quiso darle a la norma¹⁶.

16. Serían dos variantes posibles de una doctrina metodológica positivista.

Pero con cualquiera de estas dos variantes de esta segunda doctrina apenas cambia nada de lo que hemos dicho. Son eso, dos doctrinas, dos concepciones de base acerca de lo que debe ser la interpretación, dependientes de fundamentos jurídico-políticos distintos. La doctrina del uso actual (que podemos llamar literal-actual), la del uso histórico (que podemos llamar literal-histórica) y la de la voluntad de significado del legislador (que, siguiendo terminología establecida, podemos denominar subjetiva-semántica), compiten entre sí. Los métodos que proponen, en tanto funcionen como reglas, son alternativos y excluyentes. Pero cada una de esas doctrinas podrá sentar la regla que la representa y tomar los otros métodos ya no como reglas, sino como criterios. Así, para la doctrina que nosotros defendemos (la literal-actual), el método literal, basado en el uso actual, es la regla básica que se impone frente a los demás métodos-criterios. Pero el método subjetivo-semántico puede operar como criterio, en cuyo caso sería uno más de los que se pueden emplear para justificar una decisión interpretativa de asignación de uno de los significados posibles con arreglo al tenor “literal” cuando se trate de términos vagos o ambiguos. Lo que el método subjetivo semántico no podrá hacer será excepcionar al literal-actual. Y lo mismo ocurriría, a la inversa, si se defendiera la doctrina subjetivo-semántica y en aplicación de la correspondiente regla metódica se estableciera que no está claro cuál de varios significados quiso el legislador dar a sus palabras.

El esquema de uno y otro método es idéntico, como vamos a mostrar a continuación. Los que cambiarán serán los argumentos con que en el correspondiente razonamiento hayan de justificarse las concretas atribuciones de significado y, con ello, podrán variar los métodos que funcionen como auxiliares. Así, el método subjetivo-semántico podrá tener como auxiliar al método histórico, mientras que el literal-actual podrá justificar su aserto interpretativo echando mano de cosas tales como un diccionario del uso actual de la lengua.

En suma, las dos interpretaciones que estamos mencionando serían variantes de un mismo esquema, que podemos llamar de interpretación semántica. Esto se traduce en el isomorfismo con la forma del argumento literal que se expresa en la siguiente formalización del método subjetivo-semántico como regla¹⁷:

17. Si ese método se concibe como criterio, tal como antes hemos mencionado que puede hacerse, su forma sería:

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| (1) | (x) T _x P _x |
| (2) | Th |
| (3) | Vh Sh |
| <hr/> | |
| (4) | PSh |

(1)	(x) Tx OVx
(2)	Th
(3)	Vh S
<hr/>	
(4)	OS

Lectura:

(1) Para todo término lingüístico x, si x es un término de un texto legal T, entonces es obligatorio dar a x el significado que para ese término quiso el autor del texto (V).

(2) h es un término del texto legal T.

(3) El significado que para h quiso el autor del texto es el significado S.

(4) Obligatorio el significado S.

Hasta aquí nos hemos dedicado solamente a mostrar el estatuto que estos métodos de los que venimos hablando pueden poseer, en función de la doctrina de la interpretación que los conciba, y de la forma que adoptará el razonamiento de su aplicación. Pero en el planteamiento del trabajo hemos dicho que se ha de mostrar una condición adicional del uso racional de los métodos, como es la adecuada justificación de las premisas que componen ese razonamiento. Veamos ahora este punto respecto de los métodos de los que anteriormente hemos tratado.

3.2. Método teleológico.

Este método, posiblemente el más frecuentemente invocado en la jurisprudencia actual, se puede caracterizar de modo sencillo diciendo que propugna que al enunciado legal interpretado se le dé un significado que permita que la norma alcance, en el caso, su finalidad. La clave de la aplicación de este método estará, por tanto, en el establecimiento de la finalidad de la norma, dato desde el cual se justificará la decisión subsiguiente de incluir o no el caso que se enjuicie bajo la referencia de su supuesto de hecho.

Dos son las pautas que en la metodología jurídica compiten a la hora de dirigir esa asignación de un fin a la norma que se interpreta. Se corresponden con las llamadas interpretación subjetiva y objetiva. La primera, que denominaremos método teleológico-subjetivo, propone

que el fin que ha de ser tenido en cuenta es el que quiso el legislador que dictó la norma. La segunda, que llamaremos método teleológico-objetivo, defiende que el fin que se asigne a la norma ha de ser el que se corresponda con las opiniones y necesidades sociales actuales, que dicho fin sea, por tanto, el que razonablemente perseguiría un legislador que dictara la norma a día de hoy y buscara la adecuada sintonía con la sociedad presente¹⁸.

Estamos ante una alternativa como la que señalamos a propósito del método de interpretación literal. También aquí la preferencia por el método teleológico-objetivo o por el teleológico-subjetivo está determinada por doctrinas jurídico-políticas enfrentadas, en cuanto basadas en valores jurídico-políticos diversos. Cuando se sienta la preferencia de uno de estos dos métodos, el otro queda reducido al papel subordinado o complementario de entrar en juego solamente en lo que el método preferido no pueda determinar en cuanto al fin de la norma.

Cambia, pues, la base del método, y del consiguiente razonamiento, y con ello también el tipo de premisas que se han de justificar argumentativamente, pero su estructura es la misma en ambos casos. En los dos se trata, en primer lugar, de establecer el fin de la norma, para, a continuación, ponderar cuál de las interpretaciones posibles de la misma lleva a consecuencias que permitan, o permitan mejor, la realización de dicho fin.

Hemos de subrayar que estamos hablando de interpretaciones posibles, y el límite de las posibilidades viene dado aquí por la interpretación literal, en el sentido que anteriormente señalamos. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar sentencias en las que, so pretexto de consideraciones finalistas y afirmando que se está haciendo una interpretación teleológica, se rebasa el límite de los significados posibles con arreglo al uso (o a la voluntad del legislador) y se sostiene que la norma impone algo distinto de lo que dicen sus palabras. En tal caso el método teleológico no funciona como método interpretativo, por mucho que así quiera presentarse, sino como vía o excusa para la creación judicial de una nueva norma. De nuevo el problema es de legitimidad y la cuestión tiene que ver con la concepción que se profese acerca de cuál debe ser el papel del juez. Lo que en cualquier caso nos parece claro es que si el "tenor literal" no es límite al juego del argumento teleológico, la aplicación del Derecho se convierte en libre ponderación de medios una vez que, libremente también, se ha asignado a la norma un fin. El texto legal habrá dejado

18. No hace falta decir que cuando la norma es muy reciente la disyuntiva pierde buena parte de su fundamento, aunque puede no desaparecer por completo.

totalmente de determinar la decisión judicial.

Veamos cuál es la estructura común al método teleológico, en cualquiera de sus dos versiones, objetiva y subjetiva (O/V):

$$(x) \quad T_x \quad (S_x \quad F_n^{O/V}) \quad OS_x$$

Esto es: para todo término x de un texto legal T , si un significado de x conduce a la realización del fin de la norma n -ese fin puede ser el fin objetivo (o) o el que corresponda con la voluntad del legislador (v)-, entonces ése es el significado debido de x . En lo que sigue utilizaremos F_n , dejando de lado con cuál de esos dos criterios se establece el fin.

El razonamiento aplicativo de este método sería (donde h es un término de T y dicho texto legal conforma la norma n^*):

$$(1) \quad (x) \quad T_x \quad (S_x \quad F_n) \quad OS_x$$

$$(2) \quad \quad Sh \quad F_n^*$$

$$(3) \quad \quad OSh$$

La aplicación racional de este método supone la adecuada justificación de dos cosas: en primer lugar, de cuál sea el fin de la norma n^* (F_n^*); en segundo lugar, de que la interpretación en cuestión sea la que lleve a la realización de dicho fin, es decir, que sea verdadera la implicación $Sh \quad F_n^*$. Por tanto, el correcto razonamiento aplicativo ha de contener premisas que encierren razones que acrediten ambos extremos. Respecto del primero de esos dos pasos, la justificación de F_n^* , cuando el método teleológico que se aplica es el subjetivo se ha de aportar los datos o indicios que acrediten que fue ese el fin que el legislador se propuso; cuando el método sea el objetivo, se han de dar las razones por las que es más adecuado o razonable preferir a día de hoy el fin que se afirma. Por tanto, la correcta aplicación del método presupone una estructura más compleja. Denominamos esos indicios, datos o razones genéricamente como $R^1, R^2 \dots R^n$.

$$(1) \quad (x) \quad T_x \quad (S_x \quad F_n) \quad OS_x$$

$$(2) \quad \quad R^1, R^2 \dots R^n \quad F_n^*$$

$$(3) \quad \quad Sh \quad F_n^*$$

$$(4) \quad \quad OSh$$

En cuanto al segundo de los pasos citados, es decir, la justificación de $Sh \rightarrow Fn^*$, tal justificación requiere una ponderación de las distintas interpretaciones posibles en cuanto medios adecuados o inadecuados para el fin señalado. Ese razonamiento es una estimación de consecuencias que se realiza en términos probabilísticos.

Pongamos que las interpretaciones posibles de h sean S^1h y S^2h . El razonamiento completo sería:

$$\begin{array}{ll}
 (1) (x) & Tx \rightarrow (Sx \rightarrow Fn) \rightarrow OSx \\
 (2) & R^1, R^2 \dots R^n \rightarrow Fn^* \\
 (3) & S^1h \rightarrow \neg Fn^* \\
 (3) & S^2h \rightarrow Fn^* \\
 \hline
 (4) & OS^2h
 \end{array}$$

En realidad, aún no estamos recogiendo con precisión la índole del razonamiento. Téngase en cuenta que las interpretaciones, con este método, se seleccionan en razón de que la aplicación subsiguiente de la norma lleve a consecuencias que supongan la realización del fin de la norma.

Por tanto, es más exacto sustituir $Sh \rightarrow Fn^*$ por:

$$(Sh \rightarrow C) \rightarrow Fn^*$$

Si llamamos C' y C'' a las consecuencias a las que llevan las dos distintas interpretaciones posibles, tendríamos:

$$\begin{array}{ll}
 (1) (x) & Tx \rightarrow (Sx \rightarrow Fn) \rightarrow OSx \\
 (2) & R^1, R^2 \dots R^n \rightarrow Fn^* \\
 (3) & S^1h \rightarrow C' \\
 (4) & S^2h \rightarrow C'' \\
 (5) & C' \rightarrow \neg Fn^* \\
 (6) & C'' \rightarrow Fn^* \\
 \hline
 (7) & OS^2h
 \end{array}$$

Con esto recogemos pasos necesarios del correcto razonamiento aplicativo. Obviamente, aun habrá de aportarse en dicho

razonamiento (cuando no sean perfectamente evidentes) las razones que justifican la verdad o verosimilitud de (3), (4), (5) y (6). Con ello se comprueba la gran complejidad que reviste la correcta aplicación del método teleológico.

Pero tal complejidad aun puede ser mayor. Tal acontece si además de una estimación de consecuencias tiene que entrar en juego una ponderación de consecuencias. Así ocurre cuando son varios los significados que llevan a la realización del fin sentado, o cuando dicho fin es más de uno y esos fines plurales operan o bien alternativa o bien acumulativamente (cuando tratemos esto último supondremos que los fines son dos, en aras de la simplicidad). Veamos estos supuestos.

a) Cuando distintos significados de la norma interpretada llevan a la realización del fin.

Hemos dicho que el método teleológico, como método interpretativo, sólo entra en juego como pauta de elección de interpretaciones posibles, esto es, compatibles con los usos de los términos interpretados. Puede suceder que varias de esas interpretaciones posibles, aunque diversas, se estimen compatibles con el fin de la norma. En ese caso, este método serviría para descartar, en su caso, determinadas interpretaciones, aquellas que no sean congruentes con dicho fin, pero no operaría como pauta de decisión para elegir una de las interpretaciones compatibles.

Un ejemplo. Sea la norma *n* la siguiente: “Se castigará con multa de *x* pesetas a quien arroje basuras a las aguas”. El término *h* de ese texto legal del que se plantea la duda interpretativa es el término “aguas”. Asumamos que, con base en las razones consistentes que vengan al caso, hemos sentado que el fin de esa norma *n* que el legislador perseguía (*F_n*, por tanto) es: proteger las aguas contra la contaminación, para velar, así, por el medio ambiente.

Sentado ese fin, tenemos que el término “aguas” (*h*) de esa norma *n* podemos entenderlo tanto haciendo referencia a las aguas del mar (*S¹_h*) como a las aguas de los ríos (*S²_h*) o a ambas (*S³_h*)¹⁹. Por tanto, esos significados posibles de “aguas” quedarían así:

- S¹_h* = “aguas” quiere decir (en *n*) aguas del mar.
- S²_h* = “aguas” quiere decir (en *n*) aguas de los ríos.
- S³_h* = “aguas” quiere decir (en *n*) aguas del mar y de los ríos.

Es fácil argumentar que si el fin de la norma *n* es el citado

19. Tampoco hace falta insistir en que “aguas” ahí puede hacer referencia también a las aguas de los lagos, a las de los embalses, etc. Pero se trata de no complicar innecesariamente el ejemplo.

de evitar la contaminación y velar por el medio ambiente, ese fin se alcanza tanto con S^1h como con S^2h o S^3h . Por tanto, si el fin que hemos podido sentar como querido por el legislador es ése sin más²⁰, el argumento teleológico por sí solo no conduce a una decisión interpretativa unívoca y dicha decisión habrá de justificarse echando mano de otros argumentos. Por otro lado, aquí el argumento teleológico no está reñido con el de interpretación literal, dado que con éste se constata de modo evidente la vaguedad del término “aguas”. Tendríamos el siguiente esquema:

$$\begin{array}{ll}
 (1) & (x) \quad Tx \quad (Sx \quad Fn) \quad OSx \\
 (2) & Th \\
 (3) & (S^1h \vee S^2h \vee \dots S^nh) \quad Fn \\
 \hline
 (4) & O(S^1h \vee S^2h \vee \dots S^nh)
 \end{array}$$

En tal situación, la afirmación que debe optarse por cualquiera de esas tres interpretaciones S^1h , S^2h , S^3h , podría válidamente atacarse alegando que cualquiera de las otras sirve también al mismo fin, por lo que no se justifica la preferencia por ninguna. Entonces, dicha preferencia por una de ellas sólo estaría justificada por una de estas dos vías:

i) Mostrando que cualquier otro método interpretativo admisible refuerza tal elección de entre las interpretaciones compatibles con el fin. Aquí tendríamos otro método funcionando como complementario del teleológico. Es un caso de complementación entre métodos.

ii) Aplicando como regla decisoria un argumento de maximización de consecuencias positivas. Conforme a tal regla, se habrá de optar por aquella interpretación, de las compatibles con el fin de la norma, que acarree unas consecuencias que supongan la más elevada realización de aquel fin. Esta regla no sería sino la ratio subyacente al método teleológico, su razón de ser.

Se trataría de ponderar medios para un fin, buscando el que en más alta medida realice este fin. Por supuesto, cualquier afirmación acerca de en qué medida cada medio contribuye a la realización de ese fin tendrá que justificarse con buenos argumentos. Pero el esquema formal del resultado de dicha ponderación se puede representar así

20. No es difícil imaginar una situación así. Pongamos, por ejemplo, que la norma n sea un artículo del código Penal. Por supuesto, si n fuera un artículo de una ley la cual llevara por título “Ley de protección de las aguas fluviales” tendríamos una situación distinta, pues resultaría evidente que el fin de n es evitar la contaminación de las aguas de los ríos, con lo que tendríamos un argumento muy potente para afirmar que “aguas” significa “aguas de los ríos”, y no de los mares o de ambos.

(donde Z representa “el medio más idóneo de los que llevan a la realización del fin F):

$$\begin{array}{lcl} (1) & (M^1 \vee M^2 \vee \dots M^n) & F \rightarrow Z \\ (2) & M^2 & Z \end{array}$$

$$(3) \quad OM^2$$

Lectura:

(1) Si el medio 1 (M^1) o el medio 2 (M^2) o el medio n (M^n) llevan a la realización del fin F, entonces se debe optar por el medio más idóneo de los que llevan al fin F (Z).

(2) M^2 es el medio más idóneo de los que llevan al fin F (Z).

(3) Se debe optar por el significado M^2 .

Tanto (1) como (2) requerirán, para su uso racional, una suficiente fundamentación argumentativa. Igualmente, puede ser necesario justificar que sólo esas y nada más que esas interpretaciones llevan a F y, especialmente, que ninguna otra interpretación fuera de éstas lleva a Z.

Repasemos, por tanto, todo el razonamiento, teniendo en cuenta los siguientes significados de las variables utilizadas:

- n = “Se castigará con multa de x pesetas a quien arroje basuras a las aguas”.

- Fn = proteger las aguas contra la contaminación, para velar, así, por el medio ambiente.

- h = “aguas”.

- S^1_h = “aguas” quiere decir (en n) aguas del mar.

S^2_h = “aguas” quiere decir (en n) aguas de los ríos.

S^3_h = “aguas” quiere decir (en n) aguas del mar y de los ríos.

Z = Significado de h que permite la mayor realización de Fn, es decir, el mayor grado de protección frente a la contaminación y de garantía del medio ambiente.

$$(1) \quad (x) \quad T_x \quad (S_x \rightarrow F_n) \rightarrow O S_x$$

$$(2) \quad T_h$$

$$(3) \quad (S^1_h \vee S^2_h \vee \dots S^n_h) \rightarrow F_n$$

$$(4) \quad O(S^1_h \vee S^2_h \vee S^3_h)$$

Si, ante esa situación, aplicamos la regla de preferencia antes enunciada, asumiendo que hemos podido argumentar convincentemente

que con S^3h se da el mayor grado de protección del medio ambiente y de lucha contra la contaminación, tenemos:

- (1) $(S^1h \vee S^2h \vee \dots S^nh \quad Fn) \quad OZ$
 (2) $S^3h \quad Z$
-

(3) OS^3h

b) Cuando a la norma se le pueden asignar razonablemente distintos fines alternativos.

A la norma se pueden asignar razonablemente distintos fines alternativos, ya sea porque el legislador pretendió conseguir con la norma cualquiera de ellos, ya porque ambos resulten razonables y admisibles a tenor de la opinión y las necesidades actuales. En tal caso, tendríamos que:

$$Fn = F^1n \vee F^2n$$

Pongamos que el fin que se ha atribuido a la norma sea el de reducir el paro o reducir la inflación, con lo que al término h de n podemos darle el significado S^1 , que llevaría a conseguir una reducción del paro, y el significado S^2 , que llevaría a la reducción de la inflación, O sea, con S^1 se consigue uno de los fines de la norma (F^1n) y con S^2 el otro (F^2n). La correspondiente fórmula del argumento interpretativo quedaría así en este caso:

- (1) $(Sx \quad Fn)_2 \quad OSx$
 (2) $(F^1n \vee F^2n) \quad Fn$
 (3) $S^1h \quad F^1n$
 (4) $S^2h \quad F^2n$
-

(5) $O (S^1h \vee S^2h)$

La misma ratio del método interpretativo lleva a un orden claro de preferencia entre interpretaciones, regla de maximización de las consecuencias realizativas del fin. Esto es, si una de las interpretaciones posibles sirve a la realización simultánea de ambos fines, esa interpretación ha de gozar de prioridad²¹.

21. En realidad el asunto es más complicado y nos lleva a expresar la máxima dificultad del argumento ponderativo. Supongamos varios escenarios. Utilizaremos una escala de 0 a 1 para representar el grado de realización del fin de la norma. Escenario 1. La interpretación S^1 lleva a la que la realización de F^1 sea 1 y la realización de F^2 sea también 1. En este caso, la prioridad de esta interpretación es total. Escenario 2. La interpretación S^1 lleva a una realización de F^1 de 0,5 y a una realización de F^2 de 0,5. Y la interpretación S^2 a una realización de F^1 de 1 y a una realización de F^2 de 0. ¿Cuál de las dos sería preferible? La regla general sería que es preferible aquella

$$\begin{aligned} & (Sx \quad Fn) \quad OSx \\ \text{def. } Fn: & F^1_n \vee F^2_n \\ Sx \quad (& F^1_n \quad F^2_n) \quad OSx \end{aligned}$$

Sentada la regla anterior, la asignación de un significado que sólo permita realizar uno de esos fines alternativos sólo estaría justificada cuando ninguno de los significados posibles permite conseguir acumulativamente ambos²². Esta regla se podría representar así:

$$\neg(Sx \quad F^1_n \quad F^2_n) \quad (S^1_x \quad F^1_n) \quad (S^2_x \quad F^2_n) \quad O(S^1_x \vee S^2_x).$$

c) Cuando la norma tiene varios fines que se han de alcanzar acumulativamente.

La norma tiene varios fines que se han de alcanzar acumulativamente, bien porque así lo haya querido el legislador, bien porque ese sea el sentido razonable de la norma con parámetros actuales. En tal caso, el significado que se ha de asignar a la norma, de entre los posibles, es el que permita la realización conjunta de esos fines. Para dar cuenta de esta situación bastará añadir al esquema general del razonamiento aplicativo del método teleológico una premisa, la (3), con lo que quedará del siguiente modo:

$$\begin{aligned} (1) \quad & (x) \quad Tx \quad (Sx \quad Fn) \quad OSx \\ (2) \quad & \text{def. } Fn^*: F^1_{n^*} \quad F^2_{n^*} \\ (3) \quad & Sh \quad F^1_{n^*} \quad F^2_{n^*} \\ \hline (4) \quad & OSh \end{aligned}$$

Como resumen del modo de operar del método teleológico podemos sentar:

- Sólo es un método interpretativo cuando sirve para elegir entre significados posibles, en el sentido de compatibles con el "tenor literal".

- Su lógica interna, es decir, sus presupuestos justificatorios, lleva a presuponer en ocasiones el uso de ciertas reglas que lo

interpretación que maximice las consecuencias totales de realización de ambos fines. Pero cuando dicha suma total es idéntica en dos interpretaciones, ambas tendrían el mismo grado de admisibilidad. Obviamente, este modelo simplifica las cosas, pues normalmente será muy difícil cuantificar, y cuantificar comparativamente, el grado de realización de los fines. El razonamiento tiene más de intuitivo que de cálculo.

22. Habría que añadir: o cuando el grado de consecución de uno de ellos se entiende más importante o relevante que la suma de los grados de consecución de los dos.

complementan.

- Puede también en esas ocasiones funcionar con el auxilio de un método complementario, de modo que sólo unidos justificarán la decisión interpretativa.

- Sólo se basta para justificar la decisión interpretativa cuando siendo varias las interpretaciones posibles, sólo una de ellas se acredita como útil para la realización del fin de la norma.

- La justificación de las premisas que comparecen en el razonamiento aplicativo es especialmente difícil y, por tanto, merecedora de una argumentación particularmente exigente.

3.2.1. Algunas observaciones sobre el argumento consecuencialista.

Hemos visto aparecer el argumento consecuencialista, a propósito de la aplicación del método teleológico, en dos formas, esto es, como estimación de consecuencias y como ponderación de consecuencias, y actuando como regla de la decisión interpretativa basada en el método teleológico cuando éste habilita varias interpretaciones compatibles con el fin o cuando el fin es plural.

En un sentido trivial, se puede traducir todo método interpretativo a un esquema consecuencialista. Así, el método sistemático nos diría que se puede/debe optar por aquel significado de la norma que tenga como consecuencia la coherencia textual; etc.

Pero cuando nos hemos referido anteriormente al argumento consecuencialista, lo hemos visto funcionando como regla de decisión interpretativa, es decir, como pauta que sirve para determinar o bien la elección de una de las posibilidades que un método deja abiertas, o bien para determinar la elección entre distintos significados que se siguen de la aplicación de distintos métodos. Si se puede afirmar convincente y razonablemente la operatividad de reglas como ésta, tendríamos que la “elección de método” ya no queda enteramente al arbitrio del intérprete, sino que éste, si quiere ser racional, habrá de tomar en consideración tales reglas para dicha elección.

En cuanto regla de decisión interpretativa²³, ésta que llamaremos regla de preferencia de las consecuencias más favorables, establece que

23. Con otra terminología hablaríamos de directiva interpretativa de segundo grado.

entre dos interpretaciones posibles (derivadas del mismo método o de métodos distintos) se ha de optar por aquella que lleve a las consecuencias más beneficiosas.

Supongamos la siguiente situación: aplicando el argumento teleológico, bien fundamentado, tenemos que debemos asignar a la norma el significado S^1 ; aplicando el argumento de interpretación subjetiva-semántica, bien fundamentado también, tenemos que debemos asignar a la norma el significado S^2 ; y aplicando el argumento de interpretación sistemática, bien fundamentado, tenemos que debemos asignar a la misma norma el significado S^3 . Es decir, con base en los respectivos argumentos mencionados, podemos válida y justificadamente²⁴ sostener OS^1 , OS^2 y OS^3 . Por supuesto, la decisión interpretativa no puede consistir en afirmar como obligatorios esos tres significados distintos, pues la decisión interpretativa consistirá en optar por un solo significado. A esos efectos, como es bien sabido, son necesarias reglas o argumentos de segundo orden que guíen la elección entre uno de esos significados posibles en tanto que justificados por el buen uso de su respectivo argumento. De lo contrario, hay que concluir que es la valoración subjetiva del juez la que gobierna tal opción.

Pues bien, cabe postular la siguiente regla o argumento de segundo orden a ese efecto: si están justificadas varias interpretaciones distintas se debe optar por la que lleve a las consecuencias más beneficiosas²⁵. El esquema del razonamiento de aplicación de tal regla sería el siguiente:

- | | |
|-------|---|
| (1) | $(OS^1 \quad OS^2 \quad OS^3 \quad \dots OS^n) \quad OSZ$ |
| (2) | $S^3 \quad C^3$ |
| (3) | $C^3 \quad Z$ |
| <hr/> | |
| (4) | OS^3 |

24. Justificadamente, o que los respectivos argumentos están bien fundamentados, quiere decir que hemos alegado buenas razones para sustentar las premisas de cada uno de estos argumentos, razones que han de ser respaldadas, a su vez, con pruebas o razones convincentes; esto es, que, por ejemplo, respecto de la segunda premisa del argumento subjetivo-semántico hemos acreditado suficientemente que era lo que el legislador quería expresar con los términos de la norma, etc.

25. Conviene distinguir según la índole del fin que a la norma se asigne. Cuando dicho fin consiste en que se alcance un cierto estado de cosas, las distintas interpretaciones se ponderan en función de su capacidad respectiva para provocar esa consecuencia consistente en tal estado de cosas. En cambio, cuando se trata de "fines regulativos", es decir de normas cuyo fin es que se procure el más alto grado posible de cosas tales como "bienestar general", "protección de los derechos fundamentales", "seguridad del tráfico jurídico", "estabilidad de la familia", etc. (cf. K. Pleszka, T. Giszbert-Studnicki, "Empirisches Wissen als Grundlage der teleologischen Interpretation", ARSP, BbI. 53, pp. 187-188), se tratará de ponderar las interpretaciones posibles según su grado de mayor o menor realización de esa consecuencia.

Z equivale a “consecuencias más beneficiosas” y SZ es el significado que permite lograr las consecuencias más beneficiosas.

Lectura:

(1) Si se debe asignar el significado S^1 y el significado S^2 y el significado S^3 y el significado $\dots S^n$ ²⁶, entonces se debe elegir el significado que permite alcanzar las consecuencias más beneficiosas.

(2) S^3 lleva a la consecuencia C^3 .

(3) La consecuencia C^3 es la consecuencia más beneficiosa (Z)

(3) Se debe optar por S^3 .

La premisa (1) es normativa, es la formulación de la regla o directiva de segundo orden. La premisa (2), como ya sabemos, requiere fundamentar por qué la consecuencia C^3 se considera alcanzable a partir de la asignación del significado S^3 . La premisa (3) exige la fundamentación de por qué se considera C^3 más beneficiosa o conveniente que las otras consecuencias en juego, derivadas de las otras interpretaciones posibles. También puede ser necesario dar razón de que C^3 se sigue sólo de S^3 y no también, o mejor, de S^1 y S^2 ²⁷.

26. Nuevamente recalco que el “se debe” que respalda a cada uno de esos significados viene dado por el fundamento normativo que alcanzan mediante su fundamentación en el respectivo argumento interpretativo.

27. En realidad, el argumento plenamente desarrollado sería el siguiente:

(1) $(OS^1 \quad OS^2 \quad OS^3 \quad \dots OS^n) \quad OSZ$

(2) $S^1 \quad C^1$

(3) $S^2 \quad C^2$

(4) $S^3 \quad C^3$

.....
(5) $S^n \quad C^n$

(6) $C^3 \quad Z$

(7) OS^3

Las premisas (2) a (6) necesitan estar suficientemente fundamentadas. Que una premisa esté suficientemente fundamentada significa que se apoya en datos, observaciones, indicios o razones que a) no sean demostrablemente falsos; b) estén suficientemente acreditados o respaldados; c) no expresen una percepción, preferencia u opinión puramente subjetiva y desentonante de la percepción, preferencia u opinión unánime o claramente mayoritaria; d) sean congruentes con el ordenamiento jurídico; e) sean consistentes con los datos, preferencias o apreciaciones que el emisor manifieste en su argumentación en la misma o en otras decisiones. Sólo la convicción fundada y fácilmente comprobable e que se aporta un dato o apreciación evidente y, por tanto, perfectamente compatible y compartido por todos sin necesidad de ulterior fundamento, puede exonerar de la correspondiente carga argumentativa. Cuestión

Naturalmente, la aplicación de esta regla presupone una previa escala con la que medir y jerarquizar las consecuencias según su condición de mejores o peores, de más o menos beneficiosas. Aquí nuevamente puede haber variaciones según cual sea la doctrina jurídico-política de la que se parta. Una doctrina como la que nosotros defendemos, partidaria del mayor respeto posible a los mandatos contenidos en las normas, establecerá la siguiente guía para la constitución de aquella escala:

- En primer lugar, hay que insistir en que hablamos de lo que venimos llamando interpretaciones posibles. Cuando se pretende que de la decisión jurídica se siga una consecuencia que no se puede alcanzar respetando ni el tenor del enunciado legislativo tomado aisladamente ni en su interpretación sistemática (a la que luego aludiremos), la única salida es la decisión contra legem, esto es, la creación de una norma nueva que suplante a la aplicable. Ahí no actúa como regla de decisión interpretativa, sino como fundamento (admisible o no en razón de la correspondiente doctrina jurídico-política) justificatorio de la creación de una norma nueva.

- Como regla de elección de entre las interpretaciones posibles, se debe actuar con arreglo a una escala de preferencia que, para una doctrina como la que defendemos, puede tener el siguiente orden. En primer lugar, se ha de dar prevalencia a los fines expresamente establecidos por el propio ordenamiento jurídico. En segundo lugar, a los fines concordantes con las preferencias socialmente dominantes. Y sólo en último lugar a los fines que prefiera el intérprete según su concepción de lo bueno y lo justo.

Esta regla de selección de interpretaciones la hemos visto hasta ahora operando de modo positivo (avalando la opción por una determinada interpretación). Pero también puede operar como criterio negativo, para excluir una determinada interpretación, sin dar ulteriores razones para elegir entre las otras interpretaciones subsistentes (en el caso que subsista más de una interpretación alternativa). En tales ocasiones el argumento consecuencialista no impone escoger la interpretación que lleve a las consecuencias más beneficiosas, sino descartar la que lleve a ciertas consecuencias especialmente rechazables.

crucial es la de dónde puede encontrar el intérprete esos datos o razones que avalen su afirmación que de determinada interpretación, que opera como causa, se seguirán determinadas consecuencias. Pleszka y Gizbert-Studnicki manejan dos posibilidades al respecto, las ciencias sociales y el saber común (Alltagswissen). Son escépticos respecto al rendimiento de las ciencias sociales para ese propósito y sostienen, por tanto, que la apoyatura del intérprete es y debe ser el saber común (vid. op.cit., pp. 188ss).

La fórmula en este caso sería:

- (1) (OS¹ OS² OS³ ... OSⁿ) O-SZ'
 - (2) S¹ C¹
 - (3) C¹ Z'
-
- (4) O-Sx

Z' equivale a consecuencia rechazable, inadmisible.

Una consecuencia puede aparecer como rechazable por distintas razones, fundamentalmente aquí tres: razones jurídicas, razones lógicas y razones de evidencia o sentido común.

- Una interpretación es rechazable en sus consecuencias jurídicas si sus efectos suponen un daño o menoscabo de algún valor o principio considerado esencial en el ordenamiento jurídico²⁸. Por supuesto, desde una doctrina positivista se atenderá sólo a principios positivados o que se puedan inducir de las normas positivas, mientras que desde doctrinas antipositivistas se invocarán también principios no positivos que se considere que forman parte del conjunto del Derecho. Ahí vemos cómo la que a veces se llama interpretación principalista puede verse, cuando opere negativamente, para excluir interpretaciones, como especie de un argumento consecuencialista²⁹.

En el caso que el principio en cuestión forme parte de una norma jerárquicamente superior a la que se interpreta³⁰, estaríamos ante el supuesto a que nos referimos a continuación.

- Las consecuencias de una interpretación aparecen como rechazables por razones lógicas cuando dicha interpretación lleva a

28. El ejemplo que Dworkin maneja a propósito de *Riggs vs. Palmer* encajaría aquí: si se interpreta la correspondiente norma sucesoria sin excepción, admitiendo que el nieto debe heredar, se provoca un efecto dañino para el principio, tenido por fundamental del sistema jurídico, que nadie debe beneficiarse de su propio acto ilícito. Un buen ejemplo, indiscutiblemente jurídico, en Looschelders y Roth (D. Looschelders, W. Roth, *Juristische Methodik im Prozess der Rechtsanwendung*, Berlin, Duncker & Humblot, 1996, p. 108).

29. Un ejemplo. STC 19/1988, de 16 de febrero, FJ 5: "no es discutible que en nuestra Constitución la libertad se encuentra erigida, en el Art. 1, como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, entendida no sólo en su dimensión política, sino en su más amplia y comprensiva dimensión de libertad personal. Precisamente por ello, en el fundamento jurídico segundo de esta Sentencia hemos insistido en la necesidad de llevar a cabo una interpretación de las normas legales favorecedora de tal valor superior".

30. Hay que tener en cuenta que con la concepción de los principios que propugna Luzzati, los principios, que serían "las normas-base, las normas inspiradoras de un campo del derecho o del entero ordenamiento jurídico" (C. Luzzati, *La vaghezza delle norme*, Milán, Giuffrè, 1990, pp 262), estarían siempre en una cierta posición de prevalencia frente al resto de las normas, al margen de su jerarquía formal.

una antinomia. De este modo se aprecia que también en el argumento lógico-sistemático, que luego analizaremos, se puede ver funcionando un argumento consecuencialista. Sería una muestra más del carácter transversal del argumento consecuencialista.

- En cuanto a las razones de evidencia o sentido común, aparecen cuando las consecuencias de una interpretación se consideran rechazables por constituir un sinsentido, un absurdo, por dar lugar a una situación que nadie puede razonablemente querer defender. Así se aprecia que el llamado argumento de reducción al absurdo es una forma de argumento consecuencialista³¹.

La potencia del argumento de reducción al absurdo, en cuanto argumento consecuencialista negativo que es, resulta muy grande, precisamente a esos efectos de excluir interpretaciones. Tanto es así, que resulta el mejor instrumento incluso para descartar la interpretación literal, lo cual han de reconocer incluso quienes pretenden una fuerte preeminencia de la interpretación literal. Si interpretar una norma, al pie de la letra, es decir, respetando plenamente el significado usual y las reglas sintácticas del enunciado en que dicha norma se expresa, lleva a aplicaciones o consecuencias abiertamente contraintuitivas, absurdas, se rechaza tal interpretación. Ese absurdo puede ser tanto un absurdo jurídico³² o empírico. A menudo, cuando se invoca la “naturaleza de las cosas” para rechazar una determinada interpretación, se está realizando un razonamiento al absurdo³³.

31. Así lo mantienen Looschelders y Roth (D. Looschelders, W. Roth, *Juristische Methodik im Prozess der Rechtsanwendung*, Berlin, Duncker & Humblot, 1996, pp. 107ss.).

32. Pensemos en lo que sería una interpretación absolutamente literal del Art. 14 CE: llevaría a tener que eliminar por inconstitucionales prácticamente todas las normas del ordenamiento jurídico español, desde tal norma del sistema se sabotearía el sistema mismo. Toda una cadena de razonamientos al absurdo como base para rechazar por sus contraintuitivos efectos ciertas pretensiones de las partes se contiene en la SIC 16/1981, de 18 de mayo, f.º 10: “Sentado lo anterior, bastará referirse brevemente a las supuestas infracciones de otros derechos fundamentales alegados por los recurrentes. Respecto al derecho a la libertad consagrado en el artículo 17.1 de la Constitución y que habría sido violado al ordenar la sentencia impugnada el internamiento del señor XYZ, en un establecimiento adecuado, del que no podrá salir sin previa autorización del Tribunal, es de señalar que la privación de libertad es posible, según el mismo artículo, cuando se hace en los casos y la forma prevista por la Ley, y en este caso el artículo 8.1 del Código Penal ordena esa interpretación por razones fácilmente comprensibles, en casos como el presente, en que se declara la exención de responsabilidad criminal por enajenación mental. En cuanto a la lesión del derecho al honor reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución, y que aquí se habría producido en relación con el señor XYZ, al considerarle autor material de dos delitos de asesinato consumado, y respecto a su padre, porque al declararle responsable civil directo, con arreglo al artículo 20.1 del Código Penal, se le atribuye el haber desatendido sus deberes de guarda o custodia de su hijo, es evidente que en ambos casos se alegan consecuencias necesarias de la sentencia en virtud de los hechos que en ella se declaran probados y que estas consecuencias objetivas de una sentencia no pueden constituir una lesión al honor protegido por el artículo 18.1, pues la opinión contraria llevaría al absurdo de que una gran parte de los condenados penalmente podrían invocar dicho derecho para librarse de la condena. Citan también los recurrentes el artículo 33.1 de la Constitución, que reconoce la propiedad privada, pero aparte de que este precepto no se encuentra entre los protegidos por el recurso de amparo, es también evidente que la imposición de una indemnización de daños y perjuicios a consecuencia de la responsabilidad civil fijada por sentencia no constituye una lesión al derecho constitucional de la propiedad privada”.

33. Por ejemplo, si una determinada interpretación llevara a entender que para el disfrute de cierto derecho que la norma concede el titular ha de medir más de tres metros de altura, o ser capaz de vivir sin respirar,

El llamado argumento de reducción teleológica sería una manifestación del razonamiento al absurdo. Con aquel argumento se rechaza la aplicación de una norma a un caso con el argumento que interpretarla como aplicable al caso chocaría con lo que razonablemente la norma puede exigir, a tenor de lo que es su fin. Por supuesto, aquí ha tenido que anteceder una interpretación teleológica de la norma, ya sea teleológico-subjetiva o teleológico-objetiva, y una vez sentado así lo que la norma persigue, se acredita que resulta absurdo, a la vista de ese fin, aplicarla de cierta manera o a ciertos casos. Por tanto, el argumento de reducción teleológica no es sino la síntesis o acumulación de un argumento de interpretación teleológica y un argumento al absurdo. Con ello se ve también como el argumento al absurdo puede llevar al surgimiento de una laguna, en cuanto que puede reforzar la no aplicación de una norma a un caso y si no hay otra norma que se justifique como aplicable habrá surgido una laguna.

Rige, por consiguiente, para el argumento al absurdo lo que con carácter general se ha dicho para el argumento consecuencialista, en el sentido que se ha de justificar de modo argumentativamente satisfactorio que la consecuencia, la consecuencia absurda en este caso, se seguirá con elevada probabilidad y, además y para esta modalidad, es necesario justificar también que el absurdo es tal, alegando las correspondientes razones (jurídicas, empíricas...). Ahí la argumentación tendrá que ser tanto más exigente cuanto menos evidente sea el absurdo.

3.3. Argumento sistemático.

No resulta fácil dar una caracterización general de estos argumentos, dada la heterogeneidad de los que de una u otra manera suelen recogerse bajo esa denominación genérica³⁴. Posiblemente lo más aproximado, es decir, que argumentos de interpretación sistemática son aquellos que para otorgar significado a un enunciado normativo toman en cuenta (el significado de) otros enunciados normativos del mismo sistema, de modo que el significado que se haya de dar al enunciado normativo que se interpreta se torna dependiente, de algún modo, de lo que se diga en otros enunciados normativos del mismo

o carecer de sexo, etc., etc., muchos dirían que se atenta contra la naturaleza de las cosas, que es tanto como decir que la norma así interpretada resulta absurda.

34. Véase por ejemplo la gran diversidad de variantes que menciona Alexy en su artículo sobre interpretación. Ese carácter "heterogéneo" de los argumentos que se suelen acoger a la etiqueta de argumentos de interpretación sistemática lo resalta Velluzzi (V.Velluzzi, "«Interpretación sistemática»: ¿Un concepto realmente útil?", en Doxa, 21-I, 1998, p. 72-73). Ello sería debido a que "detrás de cada técnica interpretativa hay una noción particular de sistema" (ibid., 72-73). En nota 24 de ibid., p. 73 menciona ejemplos de los distintos argumentos que autores diversos reconducen a la interpretación sistemática.

sistema de normas en vigor³⁵.

Bajo tal noción general encajarían tres argumentos independientes y diferenciados: el lógico-sistemático, el topográfico y el sistemático en sentido propio.

3.3.1.- Argumento lógico-sistemático.

Mediante este argumento interpretativo se postula que entre varias interpretaciones posibles de una norma se debe elegir aquella que evita que la norma que se interpreta entre en contradicción con otra norma del sistema. En otros términos, si la norma N^1 puede tener dos significados ($S^1 N^1$ y $S^2 N^1$) y existe otra norma N^2 cuyo significado es opuesto (deónticamente) a $S^1 N^1$ o $S^2 N^1$, se debe optar por el significado de N^1 que no se oponga (deónticamente) al significado de N^2 . Más precisamente, desarrollando este esquema: si tenemos que:

$$S^1 N^1 \quad \text{Ox}$$

$$S^2 N^1 \quad \neg\text{Ox}$$

y hemos establecido que:

$$N^2 \quad \text{Ox}$$

35. Con esas notas definitorias hemos introducido matices que permitirán diferenciar los argumentos interpretativos sistemáticos de otros argumentos interpretativos:

- Al sostener que los otros enunciados que se consideran han de ser también enunciados propiamente normativos estamos excluyendo lo que puede significar para argumentos interpretativos como el subjetivo-semántico o el subjetivo-teleológico la toma en consideración, por ejemplo, de lo que se diga en la exposición de motivos de la ley. Aquí se pueden plantear supuestos curiosos, al margen de la discusión que cabe sobre si las exposiciones de motivos tienen o no carácter normativo propiamente dicho, es decir, sobre si establecen obligaciones vinculantes para algún tipo de destinatario. Supongamos que en la exposición de motivos el legislador ha sentado la definición del término "x". ¿Estaría el aplicador de la norma N de ese cuerpo legal obligado a atribuir a dicho término x, relevante para la interpretación de la norma N, el mismo significado dado con aquella definición? Creo que, si mantenemos el carácter no normativo de la exposición de motivos, hemos de concluir que la toma en consideración de dicha definición no podría apoyarse en un argumento sistemático, sino en otro tipo de argumentos, como el subjetivo-semántico. (De todos modos hay que tener en cuenta que una definición legislativa sólo es plenamente vinculante desde una teoría subjetiva de la interpretación).

- Cuando decimos que los enunciados normativos que se consideran en la interpretación sistemática han de ser del mismo sistema de normas en vigor, estamos trazando la frontera entre los argumentos sistemáticos y el argumento histórico, tal como muchos autores lo caracterizan. En efecto, puede ser relevante para establecer el significado de la norma en vigor N' conocer lo que anteriormente decía la norma N, ya derogada por N' , pero ese sería un argumento histórico.

- Cuando postulamos que las normas que conjuntamente se toman en consideración en la interpretación sistemática han de ser del mismo sistema jurídico, estamos diferenciando los argumentos sistemáticos de los argumentos comparativos, es decir, de los que para dar significado a la norma N de un determinado sistema de un Estado se apoyan en lo que normas iguales o similares significan en los sistemas jurídicos de otros Estados.

no podemos, en virtud de este argumento, elegir la interpretación $S^2 N^1$.

Con lo que hemos dicho tenemos una base para precisar cual es el peculiar estatuto de este argumento interpretativo lógico-sistemático. En efecto, sería un criterio interpretativo de segundo orden³⁶ o, quizá mejor expresado, no sería propiamente un criterio interpretativo, sino una regla de interpretación. Por ejemplo, si $S^2 N^1$ se puede sostener fundadamente a partir de la voluntad del legislador autor de N^1 , tendríamos que, con base en tal argumento, $S^2 N^1$ es una interpretación admisible. Pero la regla de interpretación lógico-sistemática prohibiría dicho resultado interpretativo porque da lugar a una antinomia con N^2 . Y la regla de interpretación lógico-sistemática se aplicaría para elegir entre los resultados de argumentos interpretativos admitidos. Ni a $S^1 N^1$ ni a $S^2 N^1$ se llega mediante un "argumento" lógico-sistemático, sino que $S^1 N^1$ y $S^2 N^1$ se toman en consideración a partir de sostenerse respectivamente en argumentos interpretativos admitidos. Por ejemplo, $S^1 N^1$ está respaldado por un argumento teleológico-objetivo y $S^2 N^1$ está respaldado por un argumento subjetivo-semántico. Pues bien, la regla de interpretación lógico-sistemática fundamenta la elección de una de esas interpretaciones, pero no fundamenta por sí una interpretación, no propone significados, sino que elimina³⁷ significados.

36. Coincide en esta idea V.Velluzzi, que distingue entre argumentos de primer grado, que "son aquellos por medio de los cuales se atribuya significado a un texto normativo"; y argumentos de segundo grado, que son "los métodos, las técnicas interpretativas utilizadas para elegir, o para apoyar, una determinada atribución de significado respecto a otras atribuciones efectuadas con los argumentos" (V.Velluzzi, "«Interpretación sistemática»: ¿Un concepto realmente útil?", en Doxa, 21-1, 1998, p. 77, nota 38).

37. Merece subrayarse este aspecto que la regla de interpretación lógico-sistemática elimina significados posibles, que su función es negativa, que por sí no fundamenta ni siquiera la elección de un significado determinado, salvo, naturalmente, cuando los significados en discusión son sólo dos y eliminar uno necesariamente implica optar por el otro. Supongamos la siguiente situación:

Estamos interpretando la norma N^1 y sus significados posibles (cada uno respaldado sólidamente por un argumento interpretativo admitido) son:

$$\begin{array}{l} S^1 N^1, S^2 N^1 \text{ y } S^3 N^1: \\ S^1 N^1 \quad Ox \\ S^2 N^1 \quad \neg Ox \\ S^3 N^1 \quad O\neg x \end{array}$$

Y pongamos que la norma N^2 tiene el siguiente contenido:

$$N^2 \quad (Ox \vee \neg Ox)$$

De esa manera, N^2 sería antinómica con $S^3 N^1$, pero no con $S^1 N^1$ ni $S^2 N^1$. Ahí, el criterio de interpretación lógico-sistemática excluye $S^3 N^1$, pero no dirime entre $S^1 N^1$ y $S^2 N^1$.

Veámoslo con el contenido de un ejemplo.

Sea N^2 : "La autoridad pública decidirá caso por caso si las fiestas populares deben realizarse en los jardines públicos (Ox) o si pueden realizarse en otros recintos públicos ($\neg Ox$)". (No se pierda de vista que x aquí significa "fiestas en los jardines públicos").

Sea N^1 : "La autoridad deberá evitar en los jardines públicos toda actividad que los dañe o deteriore".

Pues bien, si interpretamos N^1 en el sentido que la autoridad debe prohibir toda fiesta popular en los jardines públicos ($S^1 N^1$) (por ejemplo, porque esa fuera la voluntad del autor de la norma), estamos haciendo aparecer una antinomia, dado que N^2 diría que las fiestas populares en los jardines públicos pueden permitirse y N^1 querría decir (así interpretada) que en todo caso deben prohibirse. Por tanto, la decisión concreta sobre si la fiesta

En una completa teoría de la interpretación es sumamente necesario clasificar adecuadamente lo que son criterios y lo que son reglas de la interpretación. Pero, con independencia de eso, se puede asumir que también las reglas de la interpretación han de aplicarse en un razonamiento cuyas condiciones formales velen por su racionalidad. Y también aquí, por tanto, ayudará la formalización.

En la formalización de esta regla no podemos perder de vista, en primer lugar, que no estamos formalizando un método de solución de antinomias, sino una regla que prohíbe la interpretación que dé lugar a antinomias, con lo cual la antinomia no surge (y por tanto no tiene que solucionarse), sino que se evita que surja. Por tanto, en la formulación de la regla (regla que será, como siempre, la premisa mayor del razonamiento en que dicha regla se aplique) debe aparecer la referencia a la interpretación, a la cuestión del significado. Podemos formular la regla así:

$$(n) (S_n \supset A) \supset \neg S_n$$

n es la norma, S_n es un significado (interpretación) de la norma y A es una situación de antinomia entre normas del sistema jurídico.

La fórmula anterior está precisamente presuponiendo un marco en el cual cabe más de una interpretación de n y en el que al menos una de las interpretaciones posibles no provoca la antinomia. Si no fuera así, si ocurriera que o bien la interpretación posible e indubitada de n es sólo una o bien todas las varias interpretaciones posibles³⁸ condujeran a una antinomia, estaríamos ante la existencia inevitable de una antinomia, con lo que no habría lugar para el juego de esta regla interpretativa lógico-sistemática, sino que habría que echar mano de las reglas de resolución de antinomias (*lex posterior*, etc.), que son cosa distinta. En consecuencia, siempre que la regla se usa con la forma que hemos visto es presuponiendo que hay una interpretación $S'n$ que no lleva a A . Es decir, en su planteamiento más completo, incluyendo ese presupuesto, la fórmula sería:

popular F debe ser prohibida por la autoridad en los jardines públicos no puede ampararse en esa interpretación, sino que la autoridad que quiera prohibirla deberá dar ulteriores argumentos que muestren las razones por las que en ese caso estima que debe prohibirse, dado que, en virtud de N^2 tales fiestas no están prohibidas y es la autoridad la que ha de decidir caso por caso si las prohíbe o no, y N^1 sólo ampararía la prohibición basada en la concurrencia de daños.

38. Hay que insistir una vez más: si interpretación es cualquier atribución de sentido, sin límite alguno, las interpretaciones posibles de n son infinitas. Pero aquí llamamos interpretaciones posibles únicamente a aquellas que encuentren sustento en la correcta aplicación de algún argumento interpretativo admitido. Entre nosotros un argumento interpretativo finalista está admitido, por ejemplo; un argumento de interpretación estética, no.

$$(n) (S_n \supset A) \supset (S_n \supset \neg A) \supset O \neg S_n$$

Pero como tal presuposición es una constante, podemos utilizar la fórmula en su versión simple.

También conviene no perder de vista que una antonomia (A) puede presentarse de tres formas: cuando una norma afirma que algo es obligatorio y otra que está prohibido ($Ox \supset O \neg x$); cuando una norma afirma que algo es obligatorio y otra que está permitido (en el sentido de permiso fuerte, permiso de hacer o no hacer) ($Ox \supset (\neg Ox \supset \neg O \neg x)$); y cuando una norma afirma que algo está prohibido y otra que está permitido (en el sentido de permiso fuerte) ($O \neg x \supset (\neg Ox \supset \neg O \neg x)$). Por consiguiente, si en la formalización que venimos utilizando sustituimos A por esas sus tres posibilidades definitorias, tendríamos:

$$(n) S_n \supset (Ox \supset O \neg x) \vee (Ox \supset (\neg Ox \supset \neg O \neg x)) \vee (O \neg x \supset (\neg Ox \supset \neg O \neg x)) \\ O \neg S_n$$

En lo que sigue tomaremos como campo de análisis solamente el caso en que la antinomia de que se trata versa sobre la primera de las situaciones mencionadas, es decir, sea una contradicción entre mandato y prohibición ($Ox \supset O \neg x$).

Formulada la regla, queda examinar como opera el razonamiento de su aplicación, del mismo modo que venimos haciendo con los principios de la interpretación. En esta ocasión es inevitable operar con más variables, ya que se han de introducir también las referencias a dos normas (entre las cuales se plantea si surge o no la antinomia). Si simplemente estableciéramos un modelo de razonamiento así:

$$\begin{array}{ll} (1) & (n) (S_n \supset A) \supset O \neg S_n \\ (2) & S_n^1 \supset A \\ \hline (3) & O \neg S_n^1 \end{array}$$

no estaríamos recogiendo todos los elementos que tienen que comparecer en la práctica en el razonamiento y, por tanto, la formalización sería inútil a efectos de controlar si en dicho razonamiento se recogen todos los pasos necesarios y a efectos de reparar en los elementos o momentos que están necesitados de fundamentación si se pretende un uso racional de la regla.

Hagamos un primer intento de formalizar ese razonamiento aplicativo. Llamaremos a las dos normas n^1 y n^2 .

- (1) (n) (Sn A) O-Sn
 - (2) def. A: Ox O¬x
 - (3) Sn¹ Ox
 - (4) Sn² O¬x
-
- (5) O-Sn¹

Este primer esquema nos muestra ya algo importante a partir del error que contiene. Ese error reside en que (5) debería rezar así:

$$(5') \quad O-Sn^1 \vee O-Sn^2$$

pues tanto eliminando Sn¹ como eliminando Sn² se evita la antinomia. ¿A qué nos lleva esto?. Nos lleva a tomar conciencia de que, en principio, la antinomia entre dos normas n¹ y n² se puede evitar tanto cambiando la interpretación de n como cambiando la interpretación de n². Esto, en términos de argumentación, indica que siempre que se opta por tomar como referencia firme e indiscutida el significado de una norma, de modo que la única alternativa que se maneja para evitar la antinomia es la de vetar una cierta interpretación de la otra norma, es necesario justificar por qué se entiende como firme y establecido el significado de la primera. De lo contrario, se puede sospechar que la atribución de un determinado significado a ésta no es sino una forma interesada de excluir precisamente una cierta interpretación de la otra³⁹.

39. Pensemos en lo que ocurre en el caso de las sentencias de los tribunales constitucionales llamadas sentencias interpretativas. En ellas los tribunales constitucionales excluyen una interpretación de la ley cuya constitucionalidad se examina, por cuanto que la otra interpretación (supongamos que sólo son dos las interpretaciones en litigio) llevaría a entender aquella ley como contraria a la Constitución, con lo que surgiría una antinomia que habría que resolver mediante el criterio de *lex superior*, que es el que justifica la prevalencia de la norma constitucional y la nulidad de la legal. Pero si en tales sentencias el tribunal no se para a justificar su interpretación de la norma constitucional, dando su significado por único e indiscutible, existe un déficit de fundamentación, ya que no se justifica uno de los elementos cruciales del razonamiento, y por tanto un defecto de racionalidad que hace pensar que sin justificación el tribunal se convierte en intérprete autorizado de la ley y, por tanto, colegislador, mientras que su función es la de intérprete autorizado de la Constitución y, a partir de ahí, de la ley sólo en la medida en que deba juzgar de la compatibilidad de ésta con aquella, en cuanto Constitución interpretada por él. Cuestión distinta es que la práctica de sentencias interpretativas está justificada desde un punto de vista jurídico-político en el principio de conservación de las normas legales, que no es sino una de las manifestaciones del principio de respeto al legislador democrático. Aquí no podemos decir que sea un principio de búsqueda de coherencia del ordenamiento el que guía dicha práctica, porque la coherencia del ordenamiento, es decir, la no existencia de mandatos contradictorios dentro de él, queda garantizada por la mera declaración de inconstitucionalidad, esto es, por el principio de *lex superior*. Por tanto y generalizando en mayor medida, podría sostenerse que siempre que se aplica la regla de interpretación lógico-sistemática para evitar que surja una antinomia entre una norma inferior y una superior, se está velando por la conservación de las normas más que por la coherencia. Por la coherencia no vela tal regla interpretativa, sino las reglas de resolución de antinomias. La regla de interpretación lógico-sistemática sólo se convierte en salvaguarda de la coherencia del sistema cuando las dos normas en cuestión son de igual jerarquía, de igual antigüedad y del mismo grado de especialidad, es decir, cuando no hay lugar a que entre en juego ninguna de las reglas de resolución de antinomias.

Pero a efectos de simplificar, demos por sentado en adelante que una de las normas ya está dotada de una interpretación plenamente asentada y no discutida. Llamaremos a esa norma n^2 . Dando por sentada también la definición de A que antes manejamos, el esquema del razonamiento aplicativo de la regla de interpretación lógica sistemática quedaría así:

$$\begin{array}{ll}
 (1) & (n) (S_n \quad A) \quad O \neg S_n \\
 (2) & \quad n^2 \quad O_x \\
 (3) & \quad S_n^1 \quad \neg O_x \\
 (4) & \quad (O_x \quad \neg O_x) \quad A \\
 \hline
 (5) & \quad O \neg S_n^1
 \end{array}$$

Hay que insistir en que la situación en la que este razonamiento opera es la planteada por la necesidad de elegir entre interpretaciones posibles. Por eso, S_n^1 equivale a una interpretación posible de n^1 , en el sobreentendido que también cabe, al menos, otra interpretación de n ($S^1 n^1$), y que esa interpretación $S^1 n^1$ no lleva a la antinomia. Si no fuera este el caso, tendríamos dos normas, n^1 y n^2 con significados ya indiscutibles y estaríamos ante una antinomia ya existente y no evitable por vía interpretativa, y habría que aplicar una regla de resolución de antinomias. Por tanto, si en nuestro esquema queremos prescindir de sobreentendidos hemos de completarlo del siguiente modo:

$$\begin{array}{ll}
 (1) & (n) (S_n \quad A) \quad O \neg S_n \\
 (2) & \quad n^2 \quad O_x \\
 (3) & \quad S_n^1 \quad \neg O_x \\
 (4) & \quad S^1 n^1 \quad O_x \\
 (5) & \quad (O_x \quad \neg O_x) \quad A \\
 \hline
 (6) & \quad O \neg S_n^1
 \end{array}$$

Si, como antes ya se explicó, la decisión interpretativa de n^1 se dirime entre sólo dos interpretaciones posibles, y dando por sentado que la decisión interpretativa tiene obligatoriamente que acontecer (se podría formalizar esta regla y añadirla a la cadena de premisas), tenemos que (6) equivale a:

$$(7) \quad OS^1 n^1$$

En cambio, si las interpretaciones posibles de n^1 son varias y sólo una de ella provoca la antinomia, ya no se puede en ese razonamiento prescribir ninguna interpretación como debida.

- (1) (n) (S_n A) $O \neg S_n$
- (2) n^2 Ox
- (3) $S^1_n n^1$ $\neg Ox$
- (4) $S^2_n n^1$ Ox
- (5) $S^3_n n^1$ Ox
- (6) ($Ox \neg Ox$) A

$$(6) \quad O \neg S^1_n n^1$$

En este caso, la prohibición de S_n contenida en (6) equivale a:

$$(7) \quad O (S^2_n n^1 \vee S^3_n n^1).$$

Y esa alternativa hay que dirimirla, materialmente, echando mano de otras reglas o argumentos decisorios. Nunca podrá escudarse la elección de $S^2_n n^1$ o $S^3_n n^1$ exclusivamente en la mención que es descartable $S^1_n n^1$.

¿Dónde tiene que realizarse el esfuerzo argumentativo de justificación?. A efectos de simplificar, retomemos el esquema más sencillo de los dos últimos, que se refiere a la situación en que caben sólo dos interpretaciones admisibles de n .

- (1) (n) (S_n A) $O \neg S_n$
- (2) n^2 Ox
- (3) $S^1_n n^1$ $\neg Ox$
- (4) $S^2_n n^1$ Ox
- (5) ($Ox \neg Ox$) A

$$(6) \quad O \neg S^1_n n^1$$

Se ha de justificar (2), acreditando que existe la norma n^2 respecto de la cual n puede ser antinómica. Justificar esa norma es por supuesto mencionarla, pero también, en caso de duda razonable, mostrar que está vigente, que es aplicable en el campo jurídico del

que se trata, etc. También, como ya se indicó antes, es preciso justificar que no cabe salvar la antinomia modificando la interpretación de esa norma n^2 , esto es, hay que dar la razón o razones de por qué esa norma se considera dotada de un significado firme.

Respecto de (3) y (4) se impone justificar, cuando no sea plenamente evidente, que los respectivos significados (S^1n^1 y S^2n^1) respectivamente conducen y no conducen a la contradicción con el significado dado a n^2 .

3.3.2. Argumento topográfico.

Este argumento, una de las variantes clásicas del canon sistemático⁴⁰, parte de que se ha de dar a las normas el significado que deriva o se infiere de su ubicación dentro de un cuerpo legal determinado o de una determinada parte del cuerpo legal (títulos, capítulos, secciones, etc.). Veamos un ejemplo aclaratorio⁴¹. Supongamos que una norma dice lo siguiente: “Los mamíferos sólo podrán tenerse en las viviendas con una autorización especial de la autoridad competente y previa constatación de su no peligrosidad”. Así tomada en su literalidad, parece bien obvio que la norma puede referirse a gatos, perros, leones, hipopótamos, etc. Por tanto, la tenencia de gatos o perros estaría sometida al límite que la norma sienta. Pero pongamos que dicha norma está inserta dentro de una ley sobre la tenencia de animales, que dicha ley tiene dos capítulos o apartados, el primero “Condiciones de la tenencia de animales domésticos” y el segundo “Condiciones de la tenencia de animales salvajes”, y que la norma en cuestión está dentro de este último apartado. Es fácil en ese caso concluir que tal norma al utilizar el término “mamíferos” se refiere a mamíferos salvajes (leones, hipopótamos...), pero no a mamíferos domésticos, con lo que las restricciones que establece no se aplicarían a los gatos o los perros.

Formalización de este argumento:

40. Para Velluzzi, “En realidad, este argumento es de naturaleza textual y no propiamente sistemática, en cuanto que la idea de sistema aquí no desempeña un papel determinante en la atribución de significado, sino que, en buena medida, está ligada al contexto literal-textual, es decir, al significado que las disposiciones asumen en el lenguaje ordinario o técnico-jurídico y en su conexión sintáctica, así como a la indagación de la intención del legislador, sin que haya aquí una relación estrecha entre la atribución de significado al texto normativo y el sistema jurídico entendido como un sistema tendencialmente coherente. Además, la referencia topográfica no recurre al sistema jurídico sino al sistema de la ley o al subsistema en el cual se sitúa la disposición. Este argumento es sistemático en sentido débil” (Velluzzi, “«Interpretación sistemática»: ¿Un concepto realmente útil?”, en Doxa, 21-I, 1998, p. 78).

41. Según Velluzzi, “Esta técnica interpretativa se fundamenta en el presupuesto de la racionalidad del legislador conforme al cual este dispone de manera ordenada y no casual” (Velluzzi, “«Interpretación sistemática»: ¿Un concepto realmente útil?”, en Doxa, 21-I, 1998, p. 78).

Comencemos con la premisa normativa del argumento, la que nos dice que a la hora de interpretar un término debemos elegir el significado que derive de la inserción sistemática (capítulo, sección, etc.) de la norma a la que ese término pertenezca. Tendremos que utilizar como símbolo de pertenencia:

$$(1) \quad (x) \quad Tx \quad (x \ C \ Sx) \quad OSx$$

Lectura de (1): para todo x que sea un término legal, si x pertenece al capítulo (o título o sección...) C y de ahí se deriva el significado Sx, entonces es obligatorio el significado Sx.

El razonamiento completo de aplicación de este argumento tendría esta estructura:

$$\begin{array}{rcl} (1) & (x) \quad Tx & (x \ C \ Sx) \quad OSx \\ (2) & a \ C & \\ (3) & a \ C \quad Sa & \\ \hline (4) & & OSa \end{array}$$

En cuanto a la justificación argumentativa para la utilización racional de este argumento, la justificación de (2) es puramente empírica y normalmente no ofrecerá dificultades. Mayor esfuerzo puede requerir la justificación de (3), mostrando las razones que hacen que sea razonable inferir el significado de a a partir de su inserción en C.

3.3.3. Argumento sistemático en sentido propio.

Se trata del argumento interpretativo que propugna que el significado de una norma puede establecerse, en ocasiones, a partir de los datos o referencias contenidos en otras normas del mismo sistema jurídico. Se trata de establecer el significado de la norma a interpretar poniéndola en su contexto normativo, en lugar de proceder mediante una lectura aislada de dicha norma.

La más sencilla formulación formal de este argumento podría ser:

$$\begin{array}{rcl} (1) & (x) \quad Tx & OMx \\ (2) & Th & \\ (3) & Mh \quad Sh & \\ \hline (4) & & OSh \end{array}$$

Lectura:

(1) Para todo término x , si x es un término de un texto legal T , entonces se debe dar a x el significado que deriva del contexto normativo (M).

(2) h es un término del texto legal T .

(3) El significado que para h deriva del contexto normativo (M_h) es Sh .

(4) Es debido el significado Sh .

Conviene no quedarse en este nivel, de muy escasa profundidad analítica, y distinguir algunas variantes de este argumento, al tiempo que, con ello, se detallan de modo más útil sus condiciones de correcta utilización.

A) Una primera variante se da cuando el dato que se toma del contexto normativo consiste en que otras normas del mismo contexto contienen los mismos términos que se interpretan. Esto es, si estamos interpretando la norma N que contiene el término x , y el mismo término x se contiene también en la norma N' del mismo sistema jurídico, se ha de tomar en consideración el modo en que se usa ese término en N' a efectos de otorgarle significado en N .

En su empleo más común, desde este argumento se presupone que, en virtud de una presunción de consistencia lingüística del legislador, habrá que darle a x en N el mismo significado que posee en N' , salvo que concurran y se acrediten razones de peso para mostrar que x en N' significa algo distinto de lo que puede significar en N .

Si asumimos la expresión general del argumento sistemático propiamente dicho que acabamos de mencionar, esto es

(x) $T_x \quad OM_x$

hemos, en este supuesto que examinamos, de especificar M , cuyo significado sería "significado que se deriva de la presencia del mismo término en otra norma del contexto normativo". Se impone, pues, definir M en términos formales:

def. M : $(N_x \quad N'x) \quad (N'x = S) \quad \neg(C1, C2...Cn) \quad SN_x$

Lectura: Si es el caso que el término x forma parte de la norma N y forma parte también de la norma N' y que el significado de x en N es S , y si no se dan las circunstancias $C1, C2... Cn$, entonces el significado del término x en la norma N es S .

Con la mención de $C1, C2...Cn$ hacemos alusión a aquellas circunstancias o razones que pueden operar en contra de la atribución del mismo significado a x en N y N' . Imaginemos, poniendo un supuesto muy simple, que en N' se establece un determinado trato legal para x y a continuación se añade que “únicamente a los efectos de esta norma se entenderá por $x...$ ”; o que se deriven significados distintos de x a partir de la diferente inserción topográfica de N y N' .

Así pues, la formalización del razonamiento completo de aplicación de este argumento sería:

- (1) (x) $Nx \quad OMx$
 - (2) def. M: $(Nx \quad N'x) \quad (N'x = S) \quad \neg(C1, C2...Cn) \quad SNx$
 - (3) $Nh \quad N'h$
 - (4) $N'h = S$
 - (5) $\neg(C1, C2...Cn)$
-
- (6) OS

Sobre la misma base podemos formalizar el supuesto en que se afirme que concurre alguna circunstancia de las que operan en contra de que se asigne al término h de la N el mismo significado que tiene en N' :

- (1) (x) $Nx \quad OMx$
 - (2) def. M: $(Nx \quad N'x) \quad (N'x = S) \quad \neg(C1, C2...Cn) \quad SNx$
 - (3) $Nh \quad N'h$
 - (4) $N'h = S$
 - (5) $C1 \vee C2 \vee ...Cn$
-
- (6) $\neg OS$

El esquema formal nos deja, nuevamente, apreciar qué premisas de ese razonamiento requieren un mayor esfuerzo de justificación argumentativa. La premisa (3) es puramente empírica y no presenta problemas su acreditación. La dificultad se sitúa en las premisas (4) y (5).

Respecto de (4), estamos ante la atribución de un significado a un término de una norma, es decir, ante una interpretación que va a servir de base para otra interpretación. Por así decir, este argumento que analizamos consiste en sostener que, salvo razones en contra, a un término de la norma que interpretamos (N) se le debe asignar el mismo significado que a ese término se le da en otra norma ya interpretada (N'). De este modo, la solución del problema interpretativo que plantea N se apoya en la previa solución del problema interpretativo que plantea N'. En consecuencia, es argumentativamente crucial en este argumento el mostrar con buenas razones por qué a h en N' se le atribuye precisamente el significado S y no otro, con lo que no será raro que haya que echar mano de argumentos interpretativos que sustenten la interpretación S de N'. Esa labor se puede ver facilitada en el caso, por ejemplo, que en N' se contenga una interpretación legal de h.

En cuanto a (5), la carga de la argumentación exigente, sobre la base de la presunción de consistencia lingüística del legislador que hemos mencionado, y que funciona como principio interpretativo, se da especialmente en el caso del último esquema que recogíamos, es decir, cuando se alega que la concurrencia de ciertas circunstancias o razones hace inapropiado dar a h en N el mismo significado que posee en N'. Tales circunstancias o razones habrán de acreditarse en concreto, no bastando la mención genérica.

B) Una segunda variante aparece cuando el dato contextual que se toma en cuenta para asignar significado a una norma es las referencias que a la misma materia que se regula en esta norma que se interpretan se hagan en otras normas del sistema. Esto es, que si se trata de interpretar la norma N que regula la materia M, se ha de tomar en consideración lo que sobre la misma materia M se diga también en otras normas que la regulen (N', N''...). Es en esta variante donde la exigencia de sistematicidad del Derecho se deja ver con más fuerza como sustrato de un argumento interpretativo. En este caso se presupone un principio de coherencia material del ordenamiento (no de mera consistencia lingüística del legislador, como en la variante anterior).

Un ejemplo. Supongamos que en la norma N se hace referencia a un contrato C y que para resolver un concreto caso de aplicación de N se suscita la duda de si C es un contrato gratuito u oneroso. Y supongamos que en N' sin mencionar en ningún momento el contrato C (no se usa el término que lo denomina, por tanto) se regulan los caracteres genéricos de los contratos onerosos, de modo tal que C encaja perfectamente dentro de esos caracteres.

Podemos intentar formalizar así la regla que conforma la premisa primera del argumento:

$$(x) (Tx \text{ (RegM } Sx) \text{ OSx)}$$

Lectura: para todo x , si x es un término legal perteneciente a un cuerpo legal T y de la regulación de la materia M se deriva el significado S del término x , entonces es obligatorio el significado S de x .

Hemos de especificar que significa RegM . Con esa variable hacemos alusión al conjunto de normas que regulan la materia M . Podemos, pues, definir así RegM :

$$\text{Def. RegM} = N^{1M} \ N^{2M} \ \dots N^{nM}$$

Es decir, la regulación de la materia M (RegM) la componen el número n de normas que regulan dicha materia.

Si en la fórmula del argumento sustituimos RegM por su definición, nos queda

$$(x) \ Tx \ (N^{1M} \ N^{2M} \ \dots N^{nM}) \ Sx \ \text{OSx}$$

Pongamos ahora que el término h es un término legal T , en cuanto forma parte de la norma N^{1M} , es decir, de una de las normas que regulan la materia M . Representaremos esa situación como N^{1M}_h . La duda interpretativa se manifiesta en que ese término h de N^{1M} puede tener varios significados:

$$N^{1M}_h \ S^i_h \vee S^{ii}_h \vee \dots S^n_h$$

Si de la consideración conjunta de las normas N^{nM} que regulan la materia M resulta el significado S^i_h , ese es el significado debido según este argumento. Representemos, pues, el argumento al completo:

- (1) $(x) (Tx \text{ (RegM } Sx) \text{ OSx})$
- (2) $\text{Def. RegM} = N^{1M} \ N^{2M} \ \dots N^{nM}$
- (3) $N^{1M}_h \ S^i_h \vee S^{ii}_h \vee \dots S^n_h$
- (4) $(N^{1M}_h \ N^{2M} \ N^{3M}) \ S^i_h$

$$(5) \ \text{OS}^i_h$$

La premisa (3) se limita a mostrar cuáles son los significados posibles y cómo el que luego resultará es uno de los significados posibles. La premisa (4) es la que requerirá un considerable esfuerzo argumentativo, pues habrá a su vez que fundamentar su resultado, es decir, dar ulteriores razones de por qué de la consideración conjunta de todas o algunas de las normas que regulan la materia en cuestión se desprende como apropiado o necesario precisamente ese significado que se señala. Las razones ahí pertinentes pueden ser múltiples y de diverso tipo. Pero siempre tendrá que haber alguna que se pueda invocar razonablemente en favor de ese resultado interpretativo. Ahí habrá que encontrar apoyo en algún otro argumento interpretativo. Por eso podemos pensar que este argumento de interpretación sistemática en sentido propio es de aquellos que tienen siempre que ir complementados con otros argumentos, es decir, que su esquema necesita subesquemas, subrazonamientos interpretativos. La premisa (4) tiene que justificarse con un subrazonamiento interpretativo en el que se haga uso de un argumento interpretativo, ya sea el literal, el finalista o cualquier otro⁴².

3.3.4. ¿Argumento principialista?

Con cierta frecuencia se sostiene que la interpretación de las normas puede realizarse a partir de ciertos principios. Es decir

$$(x) \quad Tx \quad OSP$$

siendo P un principio.

Siempre que P sea una norma del correspondiente sistema jurídico, es decir, que esté recogido, formulado en una norma de ese sistema, estaríamos ante un argumento sistemático en sentido propio, posiblemente en su segunda variante. Basta con que en el esquema que ya conocemos

$$\begin{array}{ll}
 (1) & (N \vee S \vee S') \quad (N \quad N' \quad S) \quad OS \\
 (2) & n \quad S \vee S' \\
 (3) & n \quad n' \quad S \\
 \hline
 (4) & OS
 \end{array}$$

entendamos que n' es una norma de principio.

La peculiaridad deriva a menudo de dos cuestiones: que se suele asignar a los principios un papel o importancia superior al resto de las normas y que las normas que recogen los principios suelen poseer un grado de indeterminación muy elevado. En consecuencia, el esfuerzo argumentativo que se requiere para justificar que a la norma

42. Para el examen de un caso práctico, vid. "Apéndice AS".

que interpretamos le viene un cierto significado si la ponemos en relación con esa otra norma que recoge un principio -para justificar (3)-, por tanto es mucho mayor, si se quiere evitar la impresión de estar realizando una interpretación arbitraria.

Apéndice AS.

Análisis del argumento de interpretación sistemática en la STC 194/1989, de 16 de noviembre.

En dicha sentencia se plantea un recurso de amparo interpuesto por un cabo primero de la Guardia Civil con ocasión de una Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil que lo sanciona como autor de una “falta grave consistente en hacer peticiones contrarias a la disciplina”, falta prevista en la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Una de las cuestiones, la que aquí interesa, que se suscita en el recurso es la de si es posible imponer a un miembro de la Guardia Civil una sanción prevista en la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, lo cual presupondría que la Guardia Civil sería parte de las Fuerzas Armadas. El recurrente alega la improcedencia de la sanción sobre la base de negar, precisamente, que la Guardia Civil sea parte de las Fuerzas Armadas. En suma, “el punto en el que se produce la divergencia es el de la naturaleza militar de la Guardia Civil” (FJ 3). ¿Qué datos maneja el TC para responder a esa cuestión? Los siguientes (todos en FJ 3):

- La Constitución nada dice al respecto. Con ese silencio, según el TC, quedan abiertas distintas posibilidades, igualmente constitucionales, al legislador.

- El legislador ha elegido una de esas vías posibles, la de incluir a la Guardia Civil entre la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, pero con un régimen estatutario peculiar derivado de su definición como “Instituto armado de naturaleza militar”, a tenor de los Arts. 9 b, 13 y 15 de la LO 2/1986.

¿Cuál será su régimen disciplinario? El TC comienza, en el FJ 4, aclarando que nada hay de inconstitucional en que el legislador pueda someter a la Guardia Civil al régimen disciplinario militar.

Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión que se va a responder con un argumento sistemático. En ningún momento ninguna ley establece taxativa y literalmente que el régimen disciplinario de la Guardia Civil sea el régimen militar. Tampoco la LO 2/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas dice expresamente que sus régimen sancionador se aplique a los miembros de la Guardia

Civil⁴³.

El TC va a acoger la tesis que a los efectos de esta Ley disciplinaria los guardias civiles sí son militares y que el régimen que la misma dispone les es de plena aplicación, y esta opción interpretativa la va a basar en los siguientes datos normativos, que componen un argumento sistemático: “Y es que ciertamente así se desprende (...) de los artículos 5º, 19.2, 21, 22 y 29 de la LO 2/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”⁴⁴ (FJ 4). Sistematicemos los datos relevantes contenidos en dichos preceptos:

43. El ámbito subjetivo de dicha ley queda definido así en la misma:

Artículo 3. Están sujetos a lo dispuesto en la presente Ley los militares profesionales comprendidos en cualesquiera de las situaciones que integran las de actividad y las de reserva con las excepciones que expresamente se determinen en su legislación específica. A los militares no profesionales les será de aplicación mientras se encuentren en situación de actividad o servicio en filas. A tenor de este artículo, por tanto, la cuestión referida a la Guardia Civil queda abierta y se trata de saber si sus miembros son o no, a estos efectos, “militares”.

44. LO 2/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Artículo 5. La facultad de sancionar por vía disciplinaria en las Fuerzas Armadas se atribuye al Ministro de Defensa, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, Subsecretario de Defensa, Director General de la Guardia Civil y a las demás Autoridades y Mandos a quienes por su función o cargo corresponda, según lo regulado en la presente Ley.

ºArtículo 19. Tienen potestad para imponer sanciones al personal a sus órdenes:

1. El Ministro de Defensa.

2. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, el Subsecretario de Defensa y el Director General de la Guardia Civil.

3. Los Oficiales Generales Jefes de Región o Zona Militar, Zona Marítima y Región o Mundo Aéreo, el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina, el Comandante General de la Flota, los Comandantes de Mandos Unificados o Especificados y el Subdirector general de la Guardia Civil.

4. Los Oficiales Generales que ejerzan mando de Unidad o desempeñen Jefatura o Dirección de Organismo o Centro.

5. Los Jefes o Comandantes de Cuerpo o Unidad independiente, Ala, Flotilla, Escuadrilla, Buque o Unidad similar y los Directores o Jefes de Centro u Organismo.

6. Los Jefes de Batallón, Grupo, Escuadrón Aéreo o Unidad similar.

7. Los Jefes de Compañía o Unidad similar.

8. Los Jefes de Sección o Unidad similar.

9. Los Jefes de Pelotón o Unidad similar.

Artículo 21. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, el Subsecretario de Defensa y el Director General de la Guardia Civil podrán imponer, en el ámbito de sus respectivas competencias, las sanciones de represión, arresto de uno a treinta días, arresto de un mes y un día a tres meses y pérdida de destino.

Artículo 22. Los Oficiales Generales Jefes de Región o Zona Militar, Zona Marítima o Región o Mundo Aéreo, el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina, el Comandante General de la Flota, los Comandantes de los Mandos Unificados o Especificados y el Subdirector General de la Guardia Civil, podrán sancionar a los Oficiales Generales, Oficiales y Suboficiales que estén a sus órdenes, con represión, arresto de uno a treinta días y arresto de un mes y un día a tres meses, y a las Clases de Tropa y Minería, en igual caso, con represión, arresto de uno a treinta días y arresto de un mes y un día a tres meses.

Artículo 29. Las faltas disciplinarias cometidas por Oficiales Generales, Oficiales y Suboficiales que se encuentren en situaciones militares de actividad o reserva en que no se ocupe destino serán sancionados por los Jefes de Región o Zona Militar, Zona Marítima, Región o Mundo Aéreo o el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina en cuyas demarcaciones se cometió la falta, o en su caso, por el Jefe del Estado Mayor del Ejército respectivo o Director General de la Guardia Civil. Igualmente dicha competencia podrá ser ejercida por el Ministro de Defensa.

- Art. 5: Uno de los titulares de “La facultad de sancionar por vía disciplinaria en las Fuerzas Armadas” es el Director General de la Guardia Civil.
- Art. 19.2: El Director General de la Guardia Civil tiene potestad para imponer sanciones al personal a sus órdenes.
- Art. 21: Establece el margen de las sanciones que podrá imponer el Director General de la Guardia Civil.
- Art. 22: Establece lo mismo para el Subdirector General de la Guardia Civil.
- Art. 29: “Las faltas disciplinarias cometidas por Oficiales Generales, Oficiales y Suboficiales que se encuentren en situaciones militares de actividad o reserva en que no se ocupe destino serán sancionados por los Jefes de Región o Zona Militar, Zona Marítima, Región o Mando Aéreo o el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina en cuyas demarcaciones se cometió la falta, o en su caso, por el Jefe del Estado Mayor del Ejército respectivo o Director General de la Guardia Civil. Igualmente dicha competencia podrá ser ejercida por el Ministro de Defensa”.

De la consideración conjunta de todos los datos normativos anteriores, de lo establecido en todas esas disposiciones, deriva el TC la respuesta afirmativa a la cuestión de si los guardias civiles son militares a los efectos de la aplicación de dicho régimen sancionatorio. Existirían argumentos interpretativos para discutir esto, es decir, las interpretaciones posibles eran también otras, como se comprueba en los argumentos interpretativos de la demanda, pero el TC considera que las razones contenidas en este argumento sistemático son más fuertes que las que pueden avalar otras opciones interpretativas de las posibles.

Por detrás de este argumento interpretativo del TC se halla la idea de coherencia sistemática del legislador, que queda de relieve con sólo plantearse la siguiente pregunta: ¿qué sentido tendrían las menciones que en ese artículo se hacen a la posibilidad que la Dirección de la Guardia Civil imponga sanciones al personal bajo su mando si a este personal no se le aplicase la ley disciplinaria en que se contienen dichas menciones?.

Ahora apliquemos el esquema formal de esta variante (la B) del argumento sistemático al análisis de esta sentencia. La estructura general del argumento, recordemos, es:

(x) (Tx (RegM Sx) OSx.

Para que el argumento funcione necesitaremos, por tanto, un término legal x perteneciente al cuerpo legal T y una serie de normas que regulen la misma materia que la norma en que aparece el término x, de modo que de la consideración conjunta de esas normas o parte de ellas se desprenda un significado Sx.

La duda interpretativa surge a propósito del término “militares” del Art. 3, cuyo contenido antes recogimos, de modo que se pueda saber si con tal término quedan designados o no los guardias civiles. Las normas que regulan la materia de modo relevante para resolver esta duda interpretativa son, además del mencionado Art. 3, los Arts. 5, 19.2, 21, 22 y 29; por tanto, seis normas en total. Las representaremos respectivamente como N^{1M} , N^{2M} , N^{3M} , N^{4M} , N^{5M} y N^{6M} .

En consecuencia

$RegM = N^{1M} N^{2M} N^{3M} N^{4M} N^{5M} N^{6M}$.

Si es h el término “militares” del Art. 3 y éste es N^{1M} , lo representamos como $N^{1M}h$.

El interrogante es si el término “militares” abarca o no a los guardias civiles, con lo que las alternativas interpretativas aquí son dos, la respuesta afirmativa y la negativa. Por tanto:

$N^{1M}h \quad S^ih \vee S^{ii}h$

Tenemos ya todos los elementos para rellenar el esquema del razonamiento interpretativo correspondiente a la aplicación de este argumento:

- (1) (x) (Tx (RegM Sx) OSx
- (2) $RegM = N^{1M} N^{2M} N^{3M} N^{4M} N^{5M} N^{6M}$
- (3) $N^{1M}h \quad S^ih \vee S^{ii}h$
- (4) $(N^{1M}h \quad N^{2M} N^{3M} N^{4M} N^{5M} N^{6M}) S^ih$

(5) OS^ih

Planteémonos ahora las dos preguntas habituales. ¿Es lógicamente correcto este argumento del TC?. Parece claro que sí. ¿Es materialmente suficiente al argumentación?, es decir, ¿está bien justificada desde el punto de vista de la justificación externa?. La

respuesta afirmativa presupone tres cosas: 1ª) que la enumeración contenida en (2) sea correcta, es decir, que todas las normas que se invocan como pertinentes en la materia realmente lo sean y que estén en la enumeración todas las que realmente lo sean; 2ª) que la premisa (3) es correcta, en cuanto que sólo caben dos significados posibles de n en lo que importa. Parece claro que así es, pues a los efectos que cuentan en aquella situación legal o se aplica a los guardias civiles el régimen disciplinario de los “militares” o no se les aplica. Y 3ª), capital, que la premisa (4) sea convincente. A este respecto el TC no se detiene a explicitar por qué el significado en cuestión se deriva de las referidas disposiciones. Una tal ausencia de explicación o justificación sólo es argumentativamente admisible cuando estemos ante evidencias de tal grado que todo argumento ulterior resulte ocioso o redundante. Posiblemente tal sea el caso en esta ocasión. Por tanto parece que sí se puede considerar bien utilizado aquí el argumento interpretativo sistemático.

Más argumentos sistemáticos fáciles de analizar:

- En la STC 227/1988 se contienen varios. Uno de ellos queda reflejado en el siguiente párrafo:

La Constitución sanciona una garantía de la propiedad y de los bienes y derechos patrimoniales de los particulares (Art. 33). Pero esta garantía no es absoluta, ya que el Art. 128.1 establece que «toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al interés general», y, por lo que aquí interesa, el Art. 45.2 impone a los poderes públicos el deber de velar «por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». De una interpretación sistemática de estos preceptos no cabe derivar la tesis de que toda medida de ordenación legal de los recursos naturales y, en especial, de un recurso tan vital y escaso como el agua, deba atender prioritariamente al criterio de evitar cualquier sacrificio no imprescindible de los derechos e intereses patrimoniales de carácter individual. Más en concreto, la Constitución no garantiza que la propiedad privada haya de extenderse a todo tipo de bienes. Antes bien, el Art. 132.2, al tiempo que excluye directamente la titularidad privada de algunos géneros de bienes, permite al legislador declarar la demanialidad de otros. Conforme a esta previsión constitucional, la opción de incluir las aguas continentales en el dominio público es legítima en todo caso.

- STC 142/88

Véase el siguiente párrafo de esta sentencia (conviene mirar el resto):

Realmente, la simple lectura del artículo transcrito no permite tan radicales conclusiones, sino que, por el contrario, admite sin dificultad una interpretación conforme con la Constitución y con los preceptos del Estatuto que desarrolla. Equiparar el término «supervisión», que utiliza el precepto en sus núms. 1 y 2 al referirse a la Administración Autónoma y a los entes locales aragoneses, con la expresión «dirigirse a» que emplea el núm. 3 para «cualquier otra Administración con sede en la Comunidad Autónoma», es contrario al sentido gramatical de las palabras, a la interpretación sistemática del propio precepto y de la Ley en su conjunto, y al criterio hermenéutico reiterado por este Tribunal y recogido por el Art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ([RCL 1985\1578](#), 2635 y [ApNDL 8375](#)), de interpretar y aplicar las normas según los preceptos y principios constitucionales.

Pues bien, como sostienen en sus escritos los representantes de las Cortes de Aragón y de la Diputación General, interpretando el núm. 3 del Art. 2 de la Ley impugnada «según el sentido propio de sus palabras» (Art. 3.1 del Código Civil), no puede atribuirse al término utilizado «dirigirse a» más de lo que el mismo significa y deducir de él un sometimiento de la Administración del Estado a la supervisión del Justicia de Aragón. El precepto se limita a autorizar o hacer posible que el Justicia se ponga en comunicación con cualquier órgano o dependencia de las Administraciones presentes en la Comunidad Autónoma, bien a efectos de solicitar de ellas la información o ayuda que puedan resultar necesarias para el desempeño de la función que le atribuye el apartado a) del Art. 33.1 del E. A. A. -«la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en este Estatuto»-, respecto de la Administración que está colocada bajo su supervisión; o bien para el cumplimiento de las otras misiones que se le asignan en los apartados b) y c) del mismo precepto: La tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto. Funciones todas recogidas en el Art. 1 de la Ley impugnada. Los organismos o personas a quienes se dirija el Justicia, en virtud de lo dispuesto en el Art. 2.3, le prestarán o facilitarán tal información o auxilio en función de las normas que les sean aplicables, pero no, ciertamente, como consecuencia de este precepto de la Ley impugnada, que no establece la subordinación de todas las Administraciones presentes en la Comunidad Autónoma a la Supervisión del Justicia de Aragón, ni impone obligación alguna para tales Administraciones.

Y si esto es lo que gramaticalmente se deduce del propio apartado 3 del Art. 2, esta interpretación se confirma sin género de duda si se recurre a una interpretación sistemática del mismo, tanto en relación con los dos primeros apartados del Art. 2, como en relación con otros preceptos de la Ley impugnada y con su Exposición de Motivos. Así, frente a la dicción de los dos primeros apartados, en los que claramente se establece que el Justicia «podrá supervisar» la actuación de la Administración de la Comunidad (ap. 1) y la de los entes locales aragoneses en lo que afecte a ciertas materias (ap. 2), en el ahora discutido se dice simplemente que el Justicia «podrá dirigirse» a todo funcionario un órgano de cualquier Administración presente en la Comunidad. Es evidente, por lo demás, que si este inciso implicase la capacidad de supervisión sobre todas las dependencias administrativas de cualquier Administración residenciadas en la Comunidad Autónoma, los dos primeros apartados resultarían prácticamente innecesarios, e innecesario sería también el Art. 5, que al referirse a la obligación de auxilio, lo hace con referencia a «los órganos y entes sujetos a la supervisión del Justicia».

Si a lo expuesto se añade lo que indica el párrafo cuarto de la Exposición de Motivos, que circunscribe la competencia del Justicia a las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los entes locales en las materias transferidas a la Comunidad, y a la voluntad de la Ley que señala el párrafo sexto respecto de sus actuaciones «de no interferir en las competencias de otros poderes públicos, sean o no aragoneses», habrá de concluirse que, frente a lo afirmado por el Letrado del Estado, no es inconstitucional el Art. 2.3 de la Ley impugnada.

Este puede ser un magnífico ejemplo de otra variante o reverso negativo de la interpretación sistemática, basada en la presunción de consistencia lingüística del legislador: cuando un mismo cuerpo legal utiliza dos expresiones diferentes que no sean perfectamente sinónimas, hay que entender, salvo “prueba” en contrario, que lo hace para referirse a dos cosas también diferentes.

- Otro ejemplo bastante majo: STC 95/1988, f4:

4. Si, como ya se ha indicado, se acepta la pertinencia del juicio de relevancia efectuado por la Sala de la Audiencia Provincial, a partir de la operación interpretativa que le lleva a determinar que la norma competencial aplicable al supuesto de autos es el Real Decreto-Ley 19/1979, que amplió las competencias de la Audiencia Nacional, no es posible esquivar el juicio de constitucionalidad propuesto por dicha Sala. Es necesario, por tanto, pronunciarse sobre si la incorporación que efectúa su Art. 1 de determinados delitos a las competencias de

la Audiencia Nacional (ampliación competencial de la que según el juicio de relevancia realizado por la Sala depende la resolución de la declinatoria), es inconstitucional por poseer una categoría normativa inadecuada para su objeto como consecuencia de lo preceptuado en los Arts. 24.2 y 86.1 de la Constitución.

La cuestión, por tanto, versa en este aspecto sobre el tema -del que ya ha debido ocuparse este Tribunal en otras ocasiones [así SSTC 29/1982, de 31 de mayo ([RTC 1982\29](#)), 111/1983, de 2 de diciembre ([RTC 1983\111](#)); 3/1988, de 21 de enero ([RTC 1988\3](#))]- de los límites constitucionales a la normativa mediante Decreto-Ley, que resultan del Art. 86 C.E. En este caso concreto ha de partirse de que el derecho reconocido en el Art. 24.2 C. E. es al Juez ordinario «predeterminado por la ley», y a este respecto ha de recordarse que ese Tribunal ya ha tenido oportunidad de precisar el significado y alcance de esa remisión a la ley. Por una parte, en el sentido que la predeterminación por ley significa la preexistencia de unos criterios, con carácter de generalidad, de atribución competencial, cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso, siendo la generalidad de los criterios legales la garantía de la inexistencia de Jueces ad hoc -STC 101/1984, de 8 de noviembre, fundamento jurídico 4º; STC 199/1987, de 16 de diciembre, fundamento jurídico 8º ([RTC 1987\199](#))-. Por otro lado, y en relación con el rango de la norma en que han de contenerse dichos criterios generales, el Tribunal se ha pronunciado en el sentido de entender que se trata de ley en sentido estricto, como resulta tanto de la dicción literal del precepto como de su interpretación sistemática. Así en la STC 101/1984, de 8 de noviembre, este Tribunal afirmó que «la referencia del Art. 24.2 a la Ley, coherente con lo también dispuesto en los Arts.. 53.1 y 86.1 de la Constitución, exige que el vehículo normativo para determinar cuál será el Juez del caso es la ley en sentido estricto» y ello porque, según se indicaba en la mencionada Sentencia, «la interpretación sistemática entre el Art. 24.2 y el 117.3, ambos de la Constitución, pone de manifiesto que la garantía de la independencia e imparcialidad de los Jueces, que constituye el interés directo protegido por el derecho al Juez ordinario predeterminado -STC 47/1983, de 31 de mayo, fundamento jurídico 2.º, in fine ([RTC 1983\47](#))-, radica en la ley» (STC 101/1984, fundamento jurídico 4.º): La referencia expresa a la ley que lleva a cabo el Art. 24.2 C. E., se corresponde así con la reserva de ley que efectúa el Art. 53.1, y la reserva similar contenida en el Art. 117.3, y refleja, en relación con la fijación de las reglas fundamentales de la competencia, material y territorial, una exclusión de otras normas -Decretos-leyes o disposiciones de carácter reglamentario- distintas de la ley en sentido estricto, por cuanto que ésta se configura como la garantía de la independencia e imparcialidad judicial.

Al integrar el contenido del derecho en cuestión la predeterminación por ley del Juez competente, es claro que la intervención del Decreto-Ley en este aspecto supone, no sólo una afectación de ese derecho prohibida por el Art. 86.1 C.E., sino su misma negación, al excluir un aspecto esencial del mismo, como es la cualidad de ley formal de la norma que establezca los criterios fundamentales para la determinación de cuál sea el Juez competente. Lo que implica la exclusión del Decreto-Ley, y en conclusión, la inconstitucionalidad del Art. 1 del Real Decreto-Ley 19/1979, de 23 de noviembre, en lo que respecta al inciso cuestionado, en cuanto amplía las competencias de la Audiencia Nacional en relación con los delitos comprendidos en el Capítulo I del Título I del Libro II del Código Penal.

GUÍA DE LECTURA No. 8.

Curso: Interpretación y Argumentación Jurídica.

Texto: La interpretación judicial del Derecho, entre método y argumentación. Hacia una teoría normativa.

Autor: Dr. Juan Antonio García Amado.

OBJETIVOS.

Después de la lectura y desarrollo de la presente guía, el capacitando deberá:

- ü Conocer la utilidad de las posturas sobre interpretación y aplicación del Derecho respecto a la forma de concebir los métodos interpretativos.
- ü Identificar los presupuestos de una teoría normativa de los métodos interpretativos.
- ü Reconocer los momentos en los cuales se manifiesta el carácter valorativo de los métodos interpretativos.
- ü Identificar los criterios de una adecuada utilización de los métodos interpretativos como parámetro de una justificación racional de las decisiones jurídicas.

INDICACIONES.

Realice una lectura minuciosa del texto en referencia, responda a las preguntas que se le formulan y a las actividades propuestas.

ACTIVIDADES.

Desarrolle el cuestionario siguiente:

1. ¿Cuáles son para el autor las tres formas principales de concebir la función de los métodos de interpretación y aplicación del Derecho?

POSTURA TEÓRICA	UTILIDAD
Formalismo jurídico	
Realismo jurídico	
Teorías actuales de la argumentación (Alexy)	

2. Señale la utilidad (“lo aprovechable”) de las siguientes posturas teóricas respecto a los métodos de interpretación.
3. ¿En qué consiste el carácter normativo de una teoría de los métodos interpretativos?
4. ¿Cuáles son los presupuestos (positivos/ negativos) de una teoría normativa de los métodos jurídicos?
5. ¿Qué utilidad tiene el llamado “parámetro de racionalidad argumentativamente débil”? ¿Cuáles son los componentes del mencionado parámetro?
6. ¿En qué sentido entiende el autor el carácter deductivo del razonamiento jurídico y la compatibilidad de la decisión jurídica con el tenor “literal” de la norma?
7. ¿Cuándo un argumento o método interpretativo es admisible/ inadmisible?
8. Proporcione dos ejemplos, similares a los expuestos por el autor, de métodos interpretativos inadmisibles.
9. ¿De qué depende la admisibilidad de los métodos interpretativos?
10. ¿En qué momentos se explicita el carácter valorativo (no neutral) de una teoría de los métodos interpretativos?
11. ¿Qué valores cree usted que se potencian en los siguientes métodos o argumentos interpretativos ?.

MÉTODO/ ARGUMENTO	VALOR QUE PRESERVA
Literal	
Teleológico	
Sistemático	
In dubio pro libertate	

12. ¿Qué significa que el método interpretativo admisible tiene que ser correcto?
13. Explique los dos requisitos que debe tener el uso correcto de un método interpretativo.
14. ¿Cuál es el punto de vista del autor respecto a la distinción entre justificación interna/externa?
15. ¿En cuáles momentos de la práctica judicial decisoria (interpretativa) concurren juicios de valor?
16. Defina los conceptos siguientes:

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Interpretar	
Argumento interpretativo	
Argumento creativo	
Metodo	
Interpretaciones posibles	
Criterios de interpretacion	
Reglas de interpretacion	

17. ¿Cómo define el autor el método de interpretación literal?
18. ¿Considera usted que la pauta o regla interpretativa que el método literal utiliza se corresponde con la contenida en el Art. 20 CC?
19. ¿Cuál es la función del método literal cuando el término legal interpretado adolece de vaguedad?
20. ¿En qué casos el método literal funciona como método autónomo? Ponga un ejemplo.
21. Exprese con sus palabras la diferencia entre método literal e interpretación sintáctica.
22. El método de interpretación literal ¿es una regla o un criterio?
23. ¿En qué sentido el argumento de reducción al absurdo excepciona la interpretación literal?
24. ¿Qué rol juegan las definiciones legales en relación con la interpretación literal?
25. ¿Qué crítica podría hacerse al Art. 20 CC en cuanto considera que cuando el legislador ha definido un término se le dará el significado que mediante la definición se le asignó?
26. ¿Cómo define el autor el método teleológico?
27. Redacte la forma de asignación del fin al Art. 34 inc. últ. CPP teniendo en cuenta las dos pautas que en la metodología jurídica se utilizan para asignar el fin a una norma.

DISPOSICIÓN LEGAL	TELEOLÓGICO-SUBJETIVO	TELEOLÓGICO-OBJETIVO
Art. 34 inc. últ. CPP "No prescribe la acción penal en los casos siguientes... siempre que se tratare de hechos cuyo inicio de ejecución fuese con posterioridad a la vigencia del presente Código".		

28. ¿Cuáles son las dos operaciones que deben realizarse para estimar que se ha aplicado adecuadamente el método teleológico?
29. ¿En qué casos se evidencia la complejidad del uso del método teleológico en la interpretación?
30. En una audiencia inicial el juez sobresee provisionalmente al imputado por los delitos de daños del Art. 221 CP y disparo de arma de fuego del Art. 147-A CP. ¿Cuál de los dos efectos de los previstos en el Art. 312 CPP debe aplicar el juez?. Utilice el método teleológico para justificar la respuesta.

